

EL ORO AZUL

La crisis mundial del agua y la reificación de los recursos hídricos del planeta

Edición revisada

Primavera 2001

Autora: Maude Barlow

Presidenta nacional del Council of Canadians (Consejo de los Canadienses)

Presidenta del Comité sobre mundialización del agua del IFG

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
LA CRISIS.....	8
UN RECURSO QUE NO ES INAGOTABLE	8
A FALTA DE AGUA, FALTA DE COMIDA.....	12
ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	14
EL IMPACTO DE LA MUNDIALIZACIÓN.....	18
TODO ESTA EN VENTA.....	18
LA DESIGUALDAD DEL REPARTO.....	19
PROHIBIDO PRESERVAR.....	22
LOS BUCANEROS DEL AGUA	26
AGUA EN VENTA	26
UN RENDIMIENTO QUE DEJA QUE DESEAR	28
EL LIDERATO DEL BANCO MUNDIAL	30
LA GUERRA DEL AGUA.....	34
LAS INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA, GRANDES ACAPARADORAS DEL AGUA.....	36
EL COMERCIO MUNDIAL DEL AGUA.....	40
CANALIZACIONES.....	40
¿CANADÁ Y ALASKA: LA OPEC DEL AGUA?.....	44
EL AGUA EMBOTELLADA SE CONVIERTE EN UN GRAN NEGOCIO.....	50
EL FRACASO DE LOS GOBIERNOS	53
MEDIDAS TAN ESCUETAS COMO INOPORTUNAS.....	53
LA COMPRA Y EL COMERCIO DEL DERECHO DE AGUAS.....	58
TRATOS A PUERTA CERRADA.....	62
LA AMENAZA DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO E INVERSIÓN.....	66
EL AGUA, EL TLCAN Y EL ALCA	66
EL AGUA Y LA OMC.....	69
EL AGUA Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE INVERSIÓN.....	73
LA NECESIDAD DE ADOPTAR PRINCIPIOS COMUNES	74
LA ÉTICA DEL REPARTO DEL AGUA	75
LA ÉTICA DE LA TARIFICACIÓN DEL AGUA	77
LA PROTECCIÓN DEL AGUA: DIEZ PRINCIPIOS.....	81
CONCLUSIÓN	90
BIBLIOGRAFÍA.....	93

"Las guerras del siglo que viene serán provocadas por la falta de agua."

Ismail Serageldin, Vicepresidente del Banco Mundial

INTRODUCCIÓN

Nos agradaría pensar que el agua del planeta es inagotable. Pero este planteamiento es trágicamente erróneo. El caudal de agua dulce no alcanza ni la mitad de un uno por ciento de toda el agua de la tierra. Lo demás es agua salada, o forma parte de los hielos polares. El agua dulce únicamente se renueva por la lluvia, que cae a un ritmo de 40.000 a 50.000 kilómetros cúbicos al año. Pero debido a la congestión de las grandes urbes, a la deforestación, al desvío de las aguas por necesidades de irrigación agrícola, hasta esta ínfima parte de agua dulce está desapareciendo a la par que se va secando la superficie de la tierra; a este ritmo, el agua de todas las cuencas de los ríos de todos los continentes irá agotándose de manera ininterrumpida.

El consumo mundial del agua dobla cada veinte años, es decir a un ritmo dos veces mayor que el del crecimiento de la población humana. Según las Naciones Unidas, el agua potable ya escasea para mil millones de personas. De seguir así, de aquí al año 2025, la demanda de agua dulce llegará a superar la disponible hoy día en un 56 por ciento.

A medida que se va intensificando la crisis del agua, los gobiernos del mundo entero — presionados por las grandes multinacionales — están abogando por una solución radical: la privatización, la reificación y el desvío masivo de las aguas. Los partidarios de este sistema opinan que esta sería la única manera de poder abastecer a los lugares del mundo donde se padece sed. Empero, sabemos por experiencia que la venta del agua en un mercado abierto no sirve para colmar las necesidades de los pobres y sedientos. Muy al contrario, el agua privatizada termina en manos de quienes pueden pagar por ella, tales como las personas y ciudades pudientes, y las industrias que hacen un uso intensivo del agua, entre las que cabe mencionar la agricultura y la alta tecnología. “El agua fluye río arriba, hacia el dinero”, como comenta un residente en pleno desierto de Nuevo México, cuando el agua de su localidad fue desviada para uso y beneficio de una industria de alta

tecnología."

El impulso hacia la reificación del agua surge en un momento en que el impacto social, político y económico de la escasez del agua va convirtiéndose rápidamente en una fuerza desestabilizadora, que hace brotar conflictos relacionados con el agua en muchas partes del mundo. Tomemos el ejemplo de Malasia, que suministra aproximadamente la mitad del agua de Singapur, y que amenazó con cortar el suministro en 1997, cuando este último país lanzó ciertas críticas sobre las políticas del gobierno malasio. En África, las relaciones entre Botswana y Namibia se han deteriorado gravemente debido a los planes namibios de construir un conducto para desviar hacia el este de su país el agua del río Okavango que linda con ambos países.

Por su parte, el Alcalde de la Ciudad de México predice que el Valle de México no tardará en verse sumido en una guerra si no se resuelve cuanto antes la crisis del agua en la ciudad. Se ha escrito muchísimo sobre el riesgo de guerras por el agua en el Oriente Medio, donde cada gota de los recursos hídricos está contada. El recientemente fallecido Rey Hussein de Jordania dijo una vez que el único motivo por el que iría a la guerra contra Israel sería por el agua, ya que el caudal del río Jordán se encuentra bajo control israelí.

Mientras tanto, el futuro de uno de los recursos más esenciales a la vida está siendo determinado por personas que se lucran de su explotación y uso excesivo. Con el respaldo del Banco Mundial, un puñado de multinacionales se dedican a acaparar el control de los servicios públicos de abastecimiento de agua en los países en desarrollo, disparando los precios en detrimento de los habitantes y sacando partido de la desesperación con la cual el tercer mundo busca resolver sus problemas de escasez. Las intenciones son clarísimas: el agua debe de ser tratada como cualquier otra mercancía, y su uso debe ir conformado por los principios que rigen el mercado.

Al mismo tiempo, los gobiernos están renunciando al control de las aguas que les compete administrar mediante su participación en acuerdos comerciales como puedan ser el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sucedido por el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Lo que hacen estas instituciones mundiales en realidad es darle a las grandes multinacionales un acceso sin

precedentes al agua de los países signatarios.

Algunas empresas ya han empezado a demandar a los gobiernos con objeto de tener acceso a los recursos hídricos nacionales. Por ejemplo, la empresa californiana Sun Belt, ha entablado un juicio contra el gobierno de Canadá acogiéndose al TLCAN, por motivo de la prohibición impuesta por la provincia de Columbia Británica sobre las exportaciones de agua hace algunos años. La empresa aduce que la ley de dicha provincia infringe sobre varios derechos que el TLCAN concede al inversionista y reclama por lo tanto 10 mil millones de \$ USA, en concepto de indemnización por la pérdida de beneficios.

Gracias al respaldo de estos acuerdos comerciales internacionales, las empresas tienen la mirada puesta en el transporte del agua a granel, mediante canales de desvío y grandes barcos petroleros. Varias empresas se encuentran desarrollando tecnologías para cargar grandes cantidades de agua potable en enormes sacos sellados que pretenden remolcar por vía marítima para su venta. La venta del agua al mejor postor no hará sino agravar los peores impactos de la crisis mundial del agua.

Importantes organizaciones dedicadas a la investigación y al medio ambiente, tales como el Worldwatch Institute, el World Resources Institute y el programa de Naciones Unidas sobre medio ambiente llevan más de diez años dando el grito de alarma : si el consumo de agua sigue incrementándose al ritmo actual, los resultados serán devastadores para la tierra y sus habitantes. Grupos tales como International Rivers Network, Greenpeace, Clean Waters Network, Sierra Club y Friends of the Earth International, junto con miles de grupos comunitarios del mundo entero, están luchando contra la construcción de nuevas presas, y buscando rehabilitar los ríos y pantanos en deterioro, enfrentándose a la industria por la contaminación de las aguas y protegiendo las ballenas y otras especies acuáticas de la caza y de la sobrepesca. En algunos países, los especialistas han logrado encontrar nuevas y alentadoras soluciones a estos problemas.

Aunque la labor que realizan sea de lo más fundamental, sus esfuerzos han de ser coordinados y percibidos en el contexto más extenso de la mundialización económica y del papel de este último en lo que se refiere al fomento de la privatización y de la reificación.

¿A quién le pertenece el agua? ¿Acaso debe pertenecer a alguien? ¿Debería ser privatizada? ¿Qué derecho tienen las grandes multinacionales a adquirir los sistemas hidrológicos? ¿Acaso debe el agua ser intercambiado en un mercado abierto como una mercancía cualquiera? ¿Qué leyes son necesarias para proteger el agua? ¿En qué consiste el papel del gobierno? ¿Cómo pueden los países ricos en recursos hídricos compartir el agua con los países menos afortunados? ¿Quién es el guardián de la sangre que le da vida a la naturaleza? ¿Cómo puede el ciudadano de a pie involucrarse en el proceso?

El análisis y las recomendaciones del presente informe se basan en el principio que el agua es parte del patrimonio de la tierra y que como tal debe preservarse en el dominio público por todos los tiempos y protegerse mediante rigurosas leyes locales, nacionales e internacionales. Lo que está en juego es la noción de los bienes comunes, es decir la idea que a través de nuestras instituciones públicas reconocemos la existencia de un patrimonio humano y natural común que ha de ser preservado para las generaciones venideras. Cada localidad debe actuar como el perro guardián de nuestras aguas y establecer principios para controlar el uso de tan preciado recurso.

Creemos que este recurso vital no debe convertirse en una mercancía que se pretende vender al mejor postor, y que el acceso al agua potable para cubrir nuestras primeras necesidades constituye un derecho humano fundamental. Cada generación debe cerciorarse que sus actividades no empobrezcan la abundancia y la calidad del agua. No se puede escatimar esfuerzos para restablecer la salud de los ecosistemas acuáticos que ya están deteriorados, ni para proteger a los que aún no han sufrido daños.

Ante todo es menester proceder a una reestructuración radical de nuestras sociedades y estilos de vida, con el fin de impedir que la superficie de la tierra quede deshidratada, y aprender a convivir con los ecosistemas creados para alimentar la vida en derredor del agua. Y debemos renunciar a la comodísima noción de que podemos usar y abusar impunemente de los preciados recursos acuáticos del mundo, ya que de alguna manera la tecnología terminará por aportar soluciones. No hay “arreglo” posible para un planeta en el que se ha agotado el agua.

LA CRISIS

UN RECURSO QUE NO ES INAGOTABLE

Se suele pensar que el caudal del agua es tan magno como infinito. Este razonamiento es falso. El agua dulce disponible no alcanza ni el 0,5 por ciento de la totalidad del agua existente. El resto es agua salada o forma parte de hielos inaccesibles, de aguas subterráneas y de la tierra misma. Lo más importante es recordar que se trata de una fuente limitada.

Tal como lo puso Allerd Stikker de la Ecological Management Foundation, con sede en Amsterdam: “Sencillamente hablando, la cuestión hoy en día es que mientras la única fuente renovable de agua dulce reside en la lluvia (que genera un caudal mundial más o menos constante de 40 a 45.000 km cúbicos al año), la población mundial sigue incrementándose al ritmo de unos 85 millones de habitantes al año. Por lo tanto, el agua disponible per capita disminuye a pasos agigantados.”

Lo más preocupante es que nos dedicamos a desviar, contaminar y agotar esa fuente limitada de agua potable a una velocidad vertiginosa.

A nivel mundial, el consumo del agua se duplica cada 20 años, a un ritmo más de dos veces mayor al crecimiento de la población humana, con las correspondientes exigencias sobre nuestros ecosistemas acuáticos. Por ejemplo se prevé que el consumo de agua para usos industriales se duplicará de aquí al 2025 si seguimos creciendo como en la actualidad. Según las Naciones Unidas, hoy día 31 países padecen escasez y más de mil millones de personas carecen de agua potable. De aquí al año 2025, hasta dos terceras partes de la población mundial — que para entonces se habrá incrementado en otros 2,6 mil millones de habitantes — padecerán graves problemas de escasez. La tercera parte restante se verá casi totalmente privada de agua.

La explotación abusiva de las aguas subterráneas y el agotamiento de las capas acuíferas se han convertido en graves problemas para las regiones mayormente agrícolas del mundo. En los EE.UU. la capa acuífera de los altos llanos de Ogallala, que se extiende sobre 1300 kilómetros desde la faja angosta de T́exas hasta Dakota del Sur, se est́ vaciando ocho veces ḿs deprisa de lo que la naturaleza pueda tardar en volver a llenarla. Y la superficie de saturaci3n del valle californiano de San Joaquín ha caído de unos diez metros en algunos lugares en los últimos cincuenta ańos. Veintiún por ciento de la irrigaci3n en EE.UU se hace bombeando el agua subterránea a un ritmo superior al de su capacidad de regeneraci3n.

En la ciudad de México el bombeo sobrepasa la realimentación natural en 50 a 80 por ciento cada año y los especialistas están diciendo que la ciudad podría quedarse sin una gota de agua en el próximo decenio. En las áreas de libre comercio de las maquiladoras a lo largo de la frontera entre

México y los EE.UU., el agua es una mercancía preciada, que se suministra cada semana en muchas localidades en camiones o carretas. A principios del año 2001, la Comisión Nacional del Agua hizo constar que la zona fronteriza, que es un verdadero vertedero de desechos industriales y humanos, únicamente consigue depurar una tercera parte de las aguas de desecho y del alcantarillado. Ciudad Juárez, que crece a razón de 50.000 habitantes al año, se está quedando sin agua; el agua subterránea de la que depende la ciudad ha ido bajando unos cinco pies al año. A este ritmo, ya no quedará agua utilizable dentro de veinte años.

Como explica Stikker, si comparamos el agua con una inversión financiera, lo que estamos haciendo es disminuir irreversiblemente el capital del que disponemos en lugar de sacar provecho de sus ingresos. Y no tardaremos en quebrar. Sandra Postel del proyecto mundial de política de las aguas, puntualiza que, además de agotar el caudal, la explotación minera de las aguas subterráneas hace que el agua salada invada y destruya las reservas de agua dulce. En algunos casos, este tipo de actividad reduce para siempre la capacidad de la tierra a acumular el agua. En California, el uso y abuso de las reservas subterráneas en el Valle Central han resultado en la pérdida de más de un 40 por ciento de la capacidad de almacenaje de todos los embalses artificiales del estado. En 1998, el Ministerio Californiano de recursos hídricos anunció que a menos de encontrar nuevas reservas, el estado tendría que hacer frente de aquí al 2020, a una escasez de agua prácticamente equiparable al volumen de lo que sus pueblos y ciudades están consumiendo hoy día.

Además, la expansión mundial de las actividades de minería y de fabricación está amenazando con contaminar aún más estas reservas subterráneas. (En la mayoría de los países asiáticos, por ejemplo, estas reservas suministran más de un 50 por ciento del agua del país.) *World Resources* señala que la industrialización acelerada de los países en desarrollo va generando los metales pesados, los ácidos y agentes contaminantes orgánicos persistentes que terminarán corrompiendo las capas acuíferas.

Al mismo tiempo la explotación abusiva de los principales sistemas fluviales del planeta, está amenazando otra fuente limitada de agua. “El Nilo en Egipto, el Ganges en Asia del Sur, el Río Amarillo en China y el Río Colorado en América cuentan entre los principales ríos tan masivamente explotados (presas y desvíos por doquier, consumo excesivo), que hay determinadas

épocas en las que el agua potable ni llega a su destino final o de hacerlo, su cantidad es ínfima”, escribe Sandra Postel. El Río Colorado tiene tantísimos consumidores a lo largo de su recorrido por siete estados de los EE.UU., que no queda prácticamente agua en su desembocadura hacia el mar. Los caudales del Río Grande y de la parte superior del Río Colorado están en peligro de verse reducidos en un 75 y un 40 por ciento, respectivamente, en el siglo que viene.

Pero quizás el análisis más devastador de la crisis mundial del agua es el que proviene del ingeniero hidrológico Michal Kravèik y de su equipo de científicos de la ONG Gente y Agua de la República Eslovaca. Kravèik, que ha proseguido una brillante carrera en la Academia de Ciencias de la República, se ha dedicado a estudiar el efecto de la urbanización, de la industria agrícola, de la deforestación, de la construcción de presas, y de las infraestructuras y pavimentos contruidos por encima de los sistemas hidrológicos en su país y en los países vecinos, y ha llegado a una conclusión alarmante. La destrucción del habitat natural del agua no sólo genera una crisis de abastecimiento que afecta a las personas y a los animales, sino que disminuye gravemente la cantidad de agua potable de la que dispone el planeta.

Kravèik describe el ciclo hidrológico de una gota de agua. Para empezar se evapora de una planta, de la superficie terrestre, de un pantano, de un río, de un lago o del mar para acabar volviendo a la tierra en forma de precipitación. Si la gota de agua vuelve a caer en un bosque, lago, hierba, prado o campo, puede cooperar con la naturaleza para iniciar un nuevo ciclo hidrológico. “El derecho de domicilio de una gota forma parte de los derechos fundamentales, y es un derecho infinitamente más importante que los derechos humanos”, afirma Kravèik.

Sin embargo, si la superficie de la tierra se pavimenta por entero, si es desnudada de sus bosques y praderas, y si se drenan sus torrentes y arroyos naturales, la gota no llegará a formar parte de la cuenca de un río o de las capas acuíferas de tierra firme, dónde es tan necesaria para la gente y los animales, sino que caerá en el mar donde se limitará a ser almacenada. Es como la lluvia que cae en un enorme tejado o un gigantesco paraguas; todo lo que está debajo queda seco y el agua fluye hacia su perímetro. Como consecuencia, la disminución del agua de las capas acuíferas en tierra firme contribuye a reducir la evaporación del agua de la superficie terrestre y se convierte en una pérdida neta, mientras que los mares van subiendo. En Eslovaquia, los científicos hallaron que por

cada uno por ciento de los tejados, pavimentos, estacionamientos y autopistas que se construyen, el volumen del abastecimiento del agua pierde más de 100.000 millones de metros cúbicos al año.

Kravèik lanza una inquietante advertencia sobre el número en aumento de lo que él denomina “manchas calientes” — es decir los lugares en los que ya no queda ni una sola gota de agua. A medida que la tierra se irá secando, asistiremos al calentamiento masivo del planeta y a los correspondientes extremos climáticos: sequía, mayor vulnerabilidad a la atmósfera, aumento de la radiación solar, menor biodiversidad, derretimiento de las capas de hielo polares, inundación de territorios enteros, desertización masiva y, a un momento dado, “el caos mundial.”

A FALTA DE AGUA, FALTA DE COMIDA

Aparte de crear graves problemas ecológicos, la explotación abusiva de las aguas subterráneas y fluviales, está recrudeciendo otra temible crisis — la de garantizar el alimento del mundo.

La irrigación destinada a las cosechas es responsable del consumo del 65 por ciento de toda el agua que utilizamos los humanos, en comparación con un 25 por ciento achacable a la industria y un 10 por ciento a los hogares y municipalidades. El crecimiento demográfico anual quiere decir que cada vez se necesitará más agua para la producción de cereales (destinados al consumo humano y animal), ya que se trata de una actividad que exige muchísimo riego. Pero cada año, las ciudades e industrias que hormiguean por el mundo están exigiendo y acaparando una parte cada vez mayor del agua destinada a la agricultura. Por citar un ejemplo, California preveé un auténtico declive en las tierras irrigadas debido a su imponente explosión demográfica.

Tarde o temprano, algunas regiones estériles ya no podrán satisfacer la demanda de los agricultores a la vez que la de las ciudades que crecen a un ritmo vertiginoso. Si estas regiones han de satisfacer las necesidades cotidianas de agua, tendrán que acabar importando con carácter permanente la totalidad o gran parte de sus alimentos, con lo cual se plantea la dependencia crónica de determinados países que tendrán que seguir recurriendo a otros o a la ayuda de nuestra aldea planetaria para poder abastecerse.

En todas las regiones rurales de Latinoamérica y de Asia, la industrialización masiva está causando un desequilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Las industrias agropecuarias destinadas a la exportación tiran cada vez más de los recursos hídricos que antes sólo consumían los pequeños agricultores para autoabastecerse en alimentos. Otro gran foco de agotamiento de las reservas de agua se encuentra en los más de 800 áreas de libre comercio del tercer mundo, tales como los de Latinoamérica, dónde se producen alimentos en cadena para la élite de los consumidores mundiales. En las regiones maquiladoras de México por ejemplo, el agua potable resulta tan escasa que los niños y hasta los infantes toman Coca-Cola y Pepsi en lugar de agua. Durante una dura temporada de sequía en el norte de México en 1995, el gobierno cortó el suministro de agua a los agricultores locales para asegurar, con carácter urgente, el de las industrias de la región cuya mayoría están bajo dominio extranjero.

Pero lo que ocurre en China es quizás aún más estremecedor. El Worldwatch Institute advierte que un súbito e inesperado declive en el abastecimiento de agua de los agricultores chinos, podría amenazar la seguridad alimentaria del mundo. China se enfrenta a graves penurias de grano en el futuro próximo debido a la pérdida de agua por el desvío de recursos ya limitados de los campos hacia la industria y las ciudades. Como resultado, la demanda de cereales en China pudiera sobrepasar las cantidades exportables que existen en el mundo. Si bien China podrá sobrevivir durante una temporada por su economía en plena expansión y sus tremendos excedentes comerciales, el aumento de los precios de los granos que resultará de la situación creará un levantamiento social y político en la mayoría de las ciudades del tercer mundo, poniendo en vilo la seguridad alimentaria en el mundo.

El hemisferio occidental de la China está mayormente compuesto por desiertos y montañas; la gran masa de 1.200 millones de ciudadanos viven gracias a varios grandes ríos cuyos sistemas no bastan para satisfacer la demanda. Por ejemplo, en 1972 el Río Amarillo no llegó a desembocar en el mar por primera vez en su historia. Esto ocurrió durante quince días aquel año y el número de días va en aumento cada año desde entonces. En 1997 quedó seco durante 226 días. La historia se repite en todos los ríos chinos así como en sus capas acuíferas que se van vaciando debajo del gran llano del norte de la China. A medida que se van construyendo enormes pozos industriales para tener acceso

a la poca agua que queda, millones de agricultores chinos se encuentran con que sus pozos se van secando. Cuatrocientas de las 600 ciudades del norte de China ya padecen de una grave escasez de agua, y esto representa más de la mitad de la población del país.

Esta escasez ocurre en un momento en que la explosión demográfica china conocerá en los próximos 30 años un aumento superior al equivalente de la población de los EE.UU, y las predicciones más conservadoras anuncian que el consumo industrial anual del agua en China podría pasar de 52.000 millones a 269.000 millones de toneladas a lo largo de dichos años. Esto coincide con un aumento en los ingresos de sus ciudadanos que permite a millones de ellos instalar cañerías con duchas e inodoros en sus casas. El Worldwatch Institute predice que China será el primer país en el mundo que tendrá que reestructurar su economía prácticamente por entero para hacer frente a la escasez de agua.

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

En todo el mundo, la respuesta ante la mayor demanda de agua consiste en construir más presas y en desviar más ríos. Llevamos mucho tiempo manipulando el agua. Incluso las más antiguas civilizaciones, desde los Romanos a los Mayas construyeron acueductos y canales de irrigación. Pero ahora nuestras manipulaciones han alcanzado una escala totalmente insostenible.

El número de grandes presas en el mundo ha pasado de apenas un poco más de 5.000 en 1950 a 38.000 hoy día y el número de cursos desviados para la navegación ha aumentado de ni tan siquiera 9.000 en 1900 a unos 500.000. En el hemisferio norte, hemos canalizado y domado tres cuartas partes del caudal de los grandes ríos del mundo para la alimentación hidroeléctrica de nuestras ciudades. Si bien es cierto que los avances de la técnica moderna han permitido a los gobiernos abastecer el agua a las granjas y ciudades, estas prácticas han hecho mucho daño a la naturaleza.

Las vías navegables del mundo también tienen que hacerle frente a toda la gama de problemas causados por la contaminación tóxica de nuestras modernas industrias. Noventa por ciento de las aguas inmundas de los países en desarrollo siguen siendo vertidas sin previa depuración en los ríos

y arroyos.

En los EE.UU., tan sólo un 2 por ciento de los ríos y arroyos del país siguen su curso en su estado natural original; la zona de tierra firme ha perdido más de la mitad de sus pantanos, pérdida que se cifra en un 95 por ciento en el estado de California. La población de aves migratorias y acuáticas ha retrocedido de 60 millones en 1950 a apenas 3 millones hoy día. Los cauces más diversos desde el punto de vista biológico también son los que más se han deteriorado con el subsiguiente enorme peligro para las especies y la naturaleza.

"Los EE.UU. son el epicentro mundial de la biodiversidad del agua dulce", afirma Larry Masters de Nature Conservancy. Treinta y siete por ciento de sus peces están en peligro de extinción, así como 51 por ciento de sus crustáceos y 40 por ciento de sus anfibios, y 67 por ciento de los moluscos de agua dulce ya han desaparecido o están en vías de extinción.

Según la revista *National Geographic*, en EE.UU. se gastan mil millones de libras de insecticidas y herbicidas cada año, la mayor parte de los cuales van a parar a los sistemas hidrológicos del país. El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales afirma que 53 millones de americanos beben agua de grifo contaminada por plomo, bacterias fecales y otros contaminantes nocivos. Casi 40 por ciento de los ríos y arroyos estadounidenses son demasiado peligrosos para la pesca, la natación o su consumo. "Nuestros ecosistemas se están desmoronando en todos y cada uno de nuestros cauces en el Oeste," explica Steve Glazer del grupo de trabajo de Sierra Club encargado de estudiar el Río Colorado.

En Canadá, Jamie Linton ha recabado información sobre una inquietante historia de uso y abuso de un sistema hidrográfico en nombre de la Federación Canadiense de la Fauna y de la Flora. La pérdida de pantanos se extiende a 65 por ciento en el litoral Atlántico, 70 por ciento en el Sur de Ontario, 71 por ciento en las Praderas y 80 por ciento en el delta del Río Fraser en la provincia canadiense de Columbia Británica. La lluvia ácida ha causado un declive de 40 por ciento en las especies de peces en algunos lagos canadienses. Se han construido presas a lo largo de la mayoría de los sistemas hidrológicos del país y es de lejos el país donde más se ha procedido a desviar las aguas de los ríos de sus cauces originales. Más de un siglo de minería, forestería y de industria a

gran escala ha afectado hasta la última capa acuática en Canadá y se encuentran residuos químicos tóxicos en hasta los lugares más remotos del Artico.

En los Grandes Lagos de EE.UU., que constituyen el mayor sistema de agua dulce del mundo, el resultado ha sido una “pérdida catastrófica de diversidad biológica”, según explica Linton. Janet Abramovitz del Worldwatch Institute añade que los Grandes Lagos han perdido dos terceras partes de sus otrora extensas marismas y que menos de un 3 por ciento de las costas lacustres se prestan a la natación, no son potables y la vida acuática no puede sobrevivir en ella.

El organismo Nature Conservancy ha identificado un centenar de especies y 31 comunidades ecológicas que peligran en el sistema de los Grandes Lagos y señala que la mitad de ellas no existen en ningún otro lugar. Hace doscientos años, en cada uno de los cinco Grandes Lagos florecía una vida acuática que les era propia. En 1900, 82 por ciento de las capturas eran de peces indígenas. Ya en 1966, las especies indígenas alcanzaban tan sólo el 0,2 por ciento de la pesca; el 99,8 por ciento restante correspondía a especies exóticas, la mayoría de las cuales tenían efectos devastadores sobre las indígenas.

La historia se repite en el mundo entero. Los 33 grandes ríos de Inglaterra, salvo uno, están padeciendo; algunos ya han bajado de nivel hasta alcanzar menos de una tercera parte de su profundidad media. El Támesis se expone a secarse y los grandes buques ya deben esperar la marea alta para poder navegar. El desarrollo industrial ha separado el Río Rin en Europa del 90 por ciento de las tierras que irrigaba originalmente y el salmón indígena que normalmente lo remontaba casi ha desaparecido por completo. En los 25 últimos años, las concentraciones de fosfato y de nitrato del Danubio se han multiplicado por seis y por cuatro respectivamente, causando daños incalculables al turismo y a la pesca de la región.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 80 por ciento de los grandes ríos de China están tan deteriorados que los peces ya no pueden vivir en ellos. La construcción de la presa de Asuán en Egipto en 1970 generó la pérdida de los dos tercios del pescado que se recogía para fines comerciales.

El World Resource Institute informa que tras construirse la presa Pak Mun en Tailandia, las 150 especies de peces que vivían en el río Mun desaparecieron casi totalmente. La introducción de especies no indígenas en el Lago Victoria en Africa ha logrado poco menos que destruir la población de especies indígenas, que ya peligraban por los millones de litros de aguas inmundas sin depurar y de desechos industriales que en él se vertían de las ciudades de los vecinos países de Kenya, Tanzania y Uganda. Las tres cuartas partes de los ríos de Polonia también han sido contaminados por productos químicos, aguas inmundas y desechos agrícolas, de manera que su agua ni tan siquiera sirve para uso industrial. Prácticamente la mitad de los sistemas de depuración del agua y del alcantarillado en Moscú no son eficaces o no funcionan y, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Ruso, no es potable 75 por ciento del agua de los lagos y de los ríos de la República.

La cuenca del mar de Aral por la que se extienden Afganistán, Irán y cinco países de la ex Unión Soviética fue una vez el cuarto lago de mayores dimensiones del mundo. Los desvíos excesivos han resultado en la pérdida de la mitad de la región que cubría y de tres cuartos de su caudal, mientras que los pantanos circundantes han encogido en un 85 por ciento. Postel lo llama una de las mayores tragedias ecológicas del planeta y hace constar que casi todas las especies de peces y de aves acuáticas han sido totalmente aniquiladas y no queda nada por pescar. Cada año, el viento va recogiendo de 40 a 150 millones de toneladas de una mezcla de sales tóxicas procedentes del lecho del mar desecado y la va esparciendo por las granjas del lugar. Millones de “refugiados ecológicos” han abandonado la región.

No se puede insistir lo bastante sobre la crisis del agua que conoce nuestro planeta hoy día. Las pequeñas soluciones a plazos no conseguirán impedir el desmoronamiento de poblaciones y ecosistemas enteros. Es acuciante y aún posible volver a replantearse de manera radical nuestros valores, prioridades y sistemas políticos. Sin embargo, como veremos en el capítulo siguiente, hay fuerzas en movimiento en el mundo de hoy que, a menos que nos enfrentemos a ellas, terminarán llevando casi inexorablemente al mundo hacia un futuro en el que el agua vendrá a faltar.

EL IMPACTO DE LA MUNDIALIZACIÓN

TODO ESTA EN VENTA

El modelo de desarrollo que prevalece en nuestra época es el de la mundialización económica, sistema que radica en la creencia que una sola economía mundial con reglas universales establecidas por las empresas y los mercados financieros resulta inevitable. La libertad económica, y no la sana administración de la democracia o de la ecología, es la metáfora que escogen los que tienen el poder en esta era posterior a la Guerra Fría. De allí que el mundo esté viviendo una de las mayores transformaciones de su historia. En el corazón de dicha metamorfosis asistimos a un asalto masivo contra prácticamente todos los elementos que componen la vida.

Todo está en venta, incluso cuando se trata de conceptos que otrora se consideraban sagrados, tales como la sanidad y la educación, la cultura y el patrimonio, los códigos genéticos y las semillas, y los recursos naturales como son el aire y el agua. Estos servicios y recursos están siendo cada vez más controlados por un puñado de grandes multinacionales que van acuñando las leyes nacionales e internacionales según el dictado de sus intereses. El Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington advierte que las doscientas mayores multinacionales ya son tan grandes que sus ventas totales sobrepasan las economías conjuntas de 182 países y poseen casi el doble de los ingresos económicos de las cuatro quintas partes menos favorecidas de la humanidad. Entre las cien economías más grandes del mundo, 53 son multinacionales.

Una nueva realeza mundial es la que ahora planifica el mercado desde un punto central, destruyendo vidas y la naturaleza por donde quiera que pisa. En palabras del escritor y ex consejero principal de la Agencia de Desarrollo Internacional de los EE.UU. (USAID), David Korten, “el mundo se encuentra ahora gobernado por un casino financiero mundial cuyos empleados son banqueros anónimos y especuladores que trabajan con una mentalidad de borregos en el oscuro mundo de las finanzas mundiales. Cada día mueven más de dos billones de dólares en el mundo entero buscando beneficios rápidos y paraísos fiscales, consiguiendo que los cambios monetarios y la Bolsa hagan todo tipo de piruetas que nada tienen que ver con nuestra realidad económica. Construyen y destruyen economías nacionales sin tan siquiera cejar, compran y venden empresas y

mantienen a los políticos a la merced de sus intereses.”

LA DESIGUALDAD DEL REPARTO

Una de las características más señaladas de la mundialización económica reside en que cada vez va aumentando la diferencia entre los ricos y los pobres; se está creando una sub clase atrincherada entre las regiones y en el seno de todas las sociedades del mundo. El informe del año 2000 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano indica que la disparidad del nivel de ingresos entre los primeros 20 por ciento y los últimos 20 por ciento de la población mundial es de 150:1 y ha doblado en los 30 últimos años. Las 225 personas más ricas del mundo juntas poseen una riqueza igual a los ingresos anuales de la mitad de la humanidad. Las tres personas más ricas del mundo tienen bienes por un valor que supera el PIB de 48 países.

La quinta parte más acaudalada del mundo consume 86 por ciento de todos los bienes y servicios, mientras que la quinta parte más pobre consume apenas un poco más que un uno por ciento. Los americanos y europeos gastan bastante más cada año en alimentos para sus animales domésticos, informan las Naciones Unidas, que lo que costaría proporcionar los servicios básicos de salud y nutrición para todos los habitantes del mundo. Los americanos gastan más dinero en cosméticos cada año que el que hace falta para que todo el mundo tenga una escolarización básica

No es sorprendente así pues que la profunda falta de igualdad que fomenta la mundialización económica, ya sea intencionalmente o no, esté afectando seriamente el acceso de los pobres al agua, que es el más fundamental de los derechos de la vida. La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible indica que las tres cuartas partes de la población que tienen problemas de escasez de agua — es decir el 26 por ciento de la población total del mundo — se encuentran en los países en vías de desarrollo. De aquí al año 2025, predice la Comisión, los países con ingresos modestos que tengan problemas de agua alcanzarán el 47 por ciento de la población total del mundo.

En los países muy poblados de Asia, Africa y Latinoamérica, el aumento masivo de desechos animales y humanos que se intensificará con la llegada de granjas industriales, expone a más y más

personas a contraer enfermedades como el cólera o como la bacteria mortal E.coli presente en los abastecimientos de agua contaminados. La mayoría de los gobiernos locales no pueden ni tan siquiera permitirse adquirir el cloro que les haría falta para depurar el agua. Allí donde las localidades tenían por costumbre recurrir a los pozos y a las bombas manuales para evitar los problemas del agua contaminada de la superficie, ahora resulta que los desechos químicos y humanos también se están infiltrando en estas fuentes haciendo que la superficie de saturación se vuelva peligrosa a su vez. En las ciudades del tercer mundo ya es una práctica común el recurrir al racionamiento del agua por barrios durante algunas horas del día o durante algunos días de la semana.

Las Naciones Unidas informan que los europeos gastan 11.000 millones de dólares al año en helado, es decir 2.000 millones más que la suma total que haría falta para abastecer a la población mundial en agua potable y depurar las alcantarillas del mundo entero. Más de cinco millones de personas, niños en su mayoría, mueren cada año por enfermedades debidas a la deplorable calidad del agua potable. Mientras miles de millones sobreviven malamente sin agua potable, los habitantes de América del Norte utilizan unos 39 litros de agua por persona y por día.

Pero la falta de igualdad de acceso al agua existe en el seno de las sociedades también. En 1994, cuando Indonesia se vió devastada por una importante sequía, los pozos de los residentes se secaron pero los campos de golf de Yakarta, que acogen a turistas adinerados, siguieron recibiendo mil metros cúbicos por campo al día. En 1998 en medio de una sequía de tres años que había secado los sistemas fluviales y vaciado los embalses, el gobierno de Chipre cortó en cincuenta por ciento el abastecimiento a los granjeros mientras garantizaba a los dos millones de turistas que acuden al país cada año que dispondrían de todo el agua que precisarán. En Corea del Sur, los granjeros al sur de Seúl recientemente se armaron de hoces y formaron un bloqueo ante los camiones cisterna municipales porque estos últimos bombeaban agua para los habitantes de la ciudad y los granjeros temían que el agua llegara a faltar para las cosechas.

Anne Platt del Worldwatch Institute hace constar que una familia perteneciente a los cinco grupos de mayores ingresos en Perú, la República Dominicana o Ghana tiene, respectivamente, tres, seis, o doce veces mayores posibilidades de que el agua se conecte a su domicilio que una familia que

forma parte de los cinco grupos de menores ingresos de esos países. En vista de que no tienen acceso a servicios públicos subvencionados, explica Platt, los pobres a menudo terminan pagando más por el agua que los ricos porque deben obtenerla de fuentes ilegales o privadas.

Por ejemplo, en Lima, Perú, los pobres pueden llegar a pagar a un vendedor privado hasta tres dólares por metro cúbico de agua, que además deben de ir a recoger en cubos y que a menudo resulta contaminada. Los más ricos en cambio pagan 30 centavos por metro cúbico de agua depurada y no tienen más que abrir el grifo en su casa. Los habitantes de los barrios marginados que se extienden por las colinas de Tegucigalpa, capital de Honduras, pagan bastante más por el agua suministrada por camiones cisterna privados que lo que pagarían aunque fuera al gobierno para la instalación de las canalizaciones necesarias. En Dacca, Bangladesh, los okupas pagan el agua a un precio doce veces mayor que lo que cobran los servicios públicos de la localidad. En Lusaka, Zambia, las familias de pocos ingresos suelen desembolsar la mitad de los ingresos del hogar para obtener agua.

Los pueblos indígenas han sentido de una forma particularmente brutal el impacto de la mundialización económica y del robo del agua que les pertenecía. Al tener una relación muy directa con el agua, los indígenas son particularmente vulnerables ante cualquier proyecto de gran envergadura que altere sus ecosistemas acuáticos. Los colosales proyectos hidroeléctricos del Norte de Québec resultaron devastadores para las primeras naciones Cri así como para el caribú y el pescado que son sus modos de subsistencia.

El autor ecológico Josh Karliner explica: "El proceso de la mundialización no deja de hacer mella en el apoyo social y financiero a los derechos fundamentales de los pobres, dejando cada vez más a un lado los que no suscriben a sus franquicias y que tienen que defenderse por sí solos ante un 'mercado' brutalmente competitivo. Cada vez es más mayor el número de personas que se convierten en víctimas de la mundialización, a medida que las fuerzas de expansión empresarial van introduciéndose en las tierras agrícolas, los desiertos, los océanos y los sistemas fluviales en los que antes no se fijaban. Muchas comunidades del planeta que aún siendo pobres se bastan a sí mismas, están siendo sumergidas en una pobreza cada vez mayor desde el punto de vista social y ecológico, y se encuentran cada vez más desplazados en el plano cultural, a medida que las

empresas se van apropiando de sus recursos para colmar las exigencias aparenemente insaciables de la sociedad de consumo que se va multiplicando en el mundo.”

Aunque antaño se la reconocía como derecho humano fundamental, el agua es ahora denegada a numerosísimos miembros de nuestra familia humana. Los recursos hídricos no pueden conservarse de manera inteligente hasta que hagamos frente a la realidad de estas desigualdades. Y no nos podemos enfrentar esta realidad sin antes rechazar los principios de la mundialización económica.

PROHIBIDO PRESERVAR

La mundialización crea estructuras económicas y políticas que hacen que sea absolutamente imposible una economía con efectos benignos para el medio ambiente. La mundialización económica pretende integrar las economías nacionales en un mercado único y unificado. Las grandes multinacionales ejercen presiones sobre los gobiernos nacionales con el fin de obtener la privatización, la desreglamentación, la eliminación de las barreras al comercio y a las inversiones, de manera a dar impulso a las exportaciones, y que se renuncie en general a los controles del estado sobre la economía, para crear una sola economía mundial.

Una integración económica de esta índole hace que la producción industrial alcance niveles insospechados e inéditos, intensificando la explotación de los recursos naturales y agravando cualquier problema ecológico existente. Una competencia más agresiva obliga a los gobiernos a aminorar sus programas de protección del medio ambiente para poder incrementar la competitividad de sus productores nacionales y atraer las inversiones extranjeras. Las actividades económicas ecológicamente viables y sostenibles se castigan mediante la desreglamentación de las fuerzas del mercado haciendo que una administración responsable se convierta en un aspecto negativo de cara a la competitividad.

"La mundialización da lugar a estructuras políticas y económicas cuya pauta de producción y de consumo resulta destructiva tanto a nivel ecológico como social," afirma Victor Menotti, director del Comité encargado de estudiar las Consecuencias Ecológicas de la Mundialización en el marco

del Foro Internacional sobre Mundialización. “Todas las actividades van orientadas hacia la exportación que, para ser competitiva a nivel mundial, requiere un control centralizado sobre los extensos recursos naturales, la capacidad de tener acceso a importantes capitales de financiación, y la necesidad de recurrir a complejas megatecnologías. Cada vez se necesitan menos trabajadores con lo cual numerosísimas personas se convierten en espectadores indefensos del traslado a otros destinos de los recursos con los que trabajaron una vez.

"El resultado es un regimen que va en contra de los mismísimos principios de una económica ecológicamente sostenible, y que se resume a: quitar el control de la tierra a la gente que vive en ella, desalentar la institución de una rigurosa normativa protectora, penalizar la administración responsable, e imposibilitar la tarea de fijar el precio justo."

A medida que la naturaleza se va reificando, los gobiernos de todo el mundo están desmantelando su legislación medioambiental o permitiendo que la industria se autocontrole. Los países están bajando los impuestos sobre las sociedades y moderando su reglamentación ecológico con el fin de permanecer competitivos, que es su primer cometido en el marco de la nueva economía. Como resultado, los gobiernos se encuentran con una reducida capacidad fiscal para el saneamiento de las aguas contaminadas y la construcción de infraestructuras para proteger el agua, a la vez que se encuentran con una potestad normativa mermada para impedir que las aguas se sigan contaminando.

El imperativo de la mundialización, que consiste en el crecimiento ilimitado, hace que sea imposible para los países participantes otorgarle carácter prioritario a la preservación. Los países en desarrollo han reestructurado sus sistemas económicos para pagar la deuda y favorecer sus exportaciones como el camino hacia la prosperidad, destrozando de paso tanto los ecosistemas naturales como la normativa medioambiental. El uso abusivo y la contaminación masiva de las vías navegables interiores de la mayoría de los países en desarrollo ha sido uno de los precios que ha habido que pagar para pertenecer a la economía mundial. El empobrecimiento de las aguas subterráneas y de los ríos para satisfacer la demanda de agua de las multinacionales es otro.

Las tecnologías nocivas para el medio ambiente, inclusive los sistemas de transporte masivo

necesarios para los intercambios comerciales a nivel mundial también deterioran las aguas. Las carreteras que se han construido a costa de la naturaleza destruyen los habitats de los ríos y lagos así como los bosques; el aumento del transporte marítimo multiplica la cantidad de desechos que van a parar directamente en los océanos y lagos; y el dragado para la construcción de puertos y vías marítimas destruye el hábitat de los litorales.

China ha empezado a trabajar en un gigantesco proyecto de 1.000 millones de dólares para desviar el agua del río Yangtse a Beijing. Diez mil trabajadores casi han terminado de perforar una serie de túneles de 420 kilómetros para el drenaje del agua de la parte central del Yangtse, desde donde se canalizará ya sea a través de una elevada cadena montañosa, ya sea a través de un nuevo canal de 1.230 kilómetros para abastecer a ciudades sedientas como Taiyuan, de camino hacia la capital — el Worldwatch Institute dice que este proyecto equivale a desviar el río Mississippi para abastecer la ciudad de Washington.

Los gobiernos de varios países sudamericanos han dejado en suspenso por ahora la creación de un nuevo sistema hidrográfico de enormes proporciones que canalizaría 3.400 kilómetros de los ríos Paraguay y Paraná para uso industrial y abriría el interior del continente al comercio mundial. Pero los ecologistas aún no están convencidos; saben que hay enormes intereses empresariales en juego y que no se renunciará tan fácilmente al proyecto.

"Con las prácticas empresariales actuales," dice el hombre de negocios y ecologista Paul Hawken, nadie podrá sustraerse a la economía mundial, ni una sola reserva o coto de la fauna y de la flora, ni ninguna cultura indígena. Sabemos que hasta el último sistema natural del planeta se está desintegrando. La tierra, el agua, el aire y el mar, han sido transformados funcionalmente para pasar de ser los sistemas que alimentaban la vida a convertirse en vertederos de basura. No hay ninguna forma elegante o bien educada de decir que los negocios están destruyendo el mundo."

Pero no todo el mundo lo ve todo negro en esta crisis mundial del agua. Al fin y al cabo, lo que algunos perciben como una pesadilla ecológica de proporciones inéditas, los inversionistas del sector privado lo ven cada vez más como una ocasión de hacerse de oro.

LOS BUCANEROS DEL AGUA

AGUA EN VENTA

A medida que los gobiernos se van alejando de sus responsabilidades normativas, las grandes multinacionales dedicadas al agua, a los alimentos, a las fuentes de energía y al transporte, están al acecho, esperando sacar provecho de la escasez del agua en el mundo y acaparar el control del agua mediante: la adquisición de embalses y vías marítimas; el desarrollo de nuevas tecnologías, tales como la potabilización del agua de mar; el control sobre la efervescente industria del agua embotellada; la privatización de las canalizaciones municipales y regionales, incluyendo el alcantarillado; la construcción de infraestructuras hídricas; y la exportación del agua.

"El agua y sus infraestructuras son la última frontera que a los inversionistas privados que les queda por invadir," afirma Johan Bastin del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Lo trágico es que es también el último baluarte de la naturaleza y de los bienes comunes.

El diario canadiense *The Globe and Mail* augura que la privatización del agua será la gran industria nacional de los próximos diez años y que las inversiones en este sector se calcularán en decenas de millares de millones de dólares. "El agua se está convirtiendo rápidamente en una industria empresarial mundializada." En su edición de Mayo 2000, la revista *Fortune* indica que, ante un mundo receloso de las fluctuaciones de la Bolsa en el sector tecnológico, el agua viene a ser la inversión del siglo. El Banco Mundial establece el valor del mercado actual en un billón de dólares; pero las posibilidades de lucro son infinitas, ya que de momento, las empresas abastecen únicamente a un cinco por ciento de la población mundial.

El mundo del agua privatizada está prácticamente monopolizado por dos multinacionales francesas. La Suez Lyonnaise des Eaux (que construyó el Canal de Suez y cuyos beneficios en 1999 ascendieron a 15.000 millones de dólares sobre una cifra de negocios de 32.000 millones) y Vivendi SA vienen a ser la General Motors y la Ford del mundo del agua. Global Fortune 500 coloca a ambas empresas entre las cien mayores del mundo. Estas compañías son total o

parcialmente dueñas de un elenco de empresas hidrográficas en más de 120 países en cinco continentes y distribuyen agua a unos 100 millones de habitantes en el mundo.

El PDG de la Suez, Gerard Mestrallet, afirma que busca recrear una página del pasado de su país y desarrollar en su empresa la filosofía de la “conquista” para abrirse paso en nuevos mercados alrededor del mundo. La Suez es mucho más que una empresa hidrográfica. Según la revista *Fortune*, “Es un nuevo invento...un servicio público diversificado que ofrece a las ciudades toda la gama de servicios que requieren de infraestructuras, desde el abastecimiento de agua potable al alcantarillado, pasando por la recogida de basuras, la televisión de pago y la energía eléctrica.” La empresa, que proyecta la expansión anual de sus negocios en el sector hidrográfico en un diez por ciento anual acaba de firmar sus primeros grandes contratos en China, país que Mestrallet percibe como “un mercado de primera en el siglo que viene.”

Tanto Suez como Vivendi están luchando por acaparar el lucrativo mercado estadounidense, que pasa por el mayor del mundo con ingresos anuales del orden de 90.000 millones de dólares. Las nuevas leyes americanas han abierto la puerta a una mayor participación del sector privado en los negocios de abastecimiento y de depuración del agua en el país. Hasta ahora, este sector lo controlaban casi exclusivamente pequeños contratistas del sector público. Estas empresas se disponen ahora a fomentar la privatización masiva del mercado del agua en EE.UU. En 1999, la Suez desembolsó mil millones de dólares por la adquisición de United Water Resources y compró asimismo dos grandes productoras de sustancias químicas para la depuración del agua, Nalco y Calgon, por un valor total de 45.000 millones de dólares. En ese mismo año, Vivendi adquirió la U.S. Filter Corp. por más de 6.000 millones en efectivo, proyectando para la nueva empresa una cifra de negocios del orden de 12.000 millones de dólares. Vivendi también es propietaria de un 42 por ciento de la empresa Air and Water Technologies (AWT).

La sociedad francesa SAUR, propiedad de la constructora Bouygues, se está implantando en varios países. La compañía internacional española Aguas de Barcelona tiene muchas actividades en Latinoamérica, mientras que la Thames Water y la Biwater de Gran Bretaña están adquiriendo concesiones hidrográficas en Asia y Africa del Sur. La United Utilities of Britain se ha asociado a la gigantesca constructora estadounidense Bechtel para fomentar proyectos de privatización en

América del Norte y del Sur.

Recientemente, numerosas grandes compañías de gaseoductos/oleoductos e hidroeléctricas se han lanzado en el campo del agua prometiéndose recoger grandes cosechas de lo que ellos llaman la “convergencia” — la posibilidad de que una sola compañía canalice con ánimo de lucro y en una sola operación el gas natural, el agua y la electricidad, a millones de hogares. La General Electric ha aunado sus fuerzas a las del Banco Mundial y del especulador George Soros para invertir miles de millones de dólares en un “Fondo Energético Mundial” con vistas a privatizar la energía y el agua en todo el mundo, informa el *Guardian Weekly*.

El gigante de las empresas energéticas de los EE.UU., Enron, que ha adquirido la Wessex Water PLC de Inglaterra, está ofertando en busca de obtener enormes contratos a costa de los ya establecidos para privatizar los servicios de agua en Bulgaria, Río de Janeiro, Berlín y Panamá bajo su nueva división hidrográfica, Azurix. El grupo RWE, principal empresa hidroeléctrica de Alemania, también se va dibujando como importante protagonista del mundo de los servicios de aguas y alcantarillado

UN RENDIMIENTO QUE DEJA QUE DESEAR

La privatización de los suministros municipales de agua en el mundo entero tiene pésimos antecedentes. Desde que dichos servicios fueron privatizados en Francia, las tarifas se han disparado en un 150 por cien. El gobierno francés también informa que el agua potable suministrada a más de cinco millones de personas después de la privatización estaba contaminada. Los magistrados franceses han dedicado buena parte de último decenio a la investigación de alegatos de corrupción contra los ejecutivos de las dos mayores sociedades francesas del agua que fueron inculpadas en tres ocasiones por sobornos encaminados a obtener contratos hidrográficos en Francia.

Public Services International (PSI) informa que entre 1989 (año en que el agua fue privatizada) y 1995, los consumidores ingleses tuvieron que hacer frente a un aumento del 106 por ciento de las

tarifas, mientras que los beneficios de las empresas aumentaban en un 692 por ciento. El sueldo del director mejor pagado de la North West Water, por ejemplo, se incrementó en un 708 por ciento. Como resultado de estas subidas de precio, el número de consumidores que han tenido que desconectarse de los servicios ha aumentado en un 50 por ciento desde la privatización. Las empresas de agua británicas figuran entre los máximos responsables de los daños infligidos al medio ambiente en el Reino Unido. Entre 1989 y 1997, se entablaron 128 demandas judiciales contra las empresas siguientes: Anglian, Severn Trent, Northumbrian, Wessex (subsidiaria de Enron) y Yorkshire.

Por otra parte, la privatización siempre va acompañada por despidos. En Gran Bretaña, las empresas privadas despidieron a un 25 por ciento de la población activa, es decir a unos 100.000 trabajadores, cuando adquirieron los derechos de aguas. En Diciembre de 1999, al recibir la orden del gobierno de rebajar los precios, anunciaron miles de nuevos despidos pese a los lucrosos beneficios que estaban cosechando. En Europa Central, bastaron unos pocos años para que las empresas privadas de suministro de aguas encogieran en un 30 por ciento la población activa de siete ciudades (cuyos derechos habían adquirido). En Sydney, Australia, cuando se privatizó el Consejo de Aguas, miles de trabajadores perdieron su empleo y los precios al consumo doblaron en apenas cuatro años.

Cuando se privatiza el agua, el público suele perder el derecho a obtener información sobre la calidad del agua y las normas vigentes. Se produjo un verdadero escándalo cuando se descubrió en el verano de 1998 que el agua suministrada por la Sydney, proveedora del agua de Australia ahora controlada por la Suez Lyonnaise des Eaux, contenía altas concentraciones de parásitos giardia y criptosporidium, hecho que le fue ocultado al público cuando se descubrió.

En Ontario, Canadá, el gobierno introdujo la denominada “Revolución del Sentido Común”, “revolución” cuyas características principales residían en cortes masivos en el presupuesto del medio ambiente, la privatización de los laboratorios hidrográficos experimentales, la desreglamentación de la infraestructura de protección del agua, y el despido de un elenco de especialistas en este campo. En 1999, justo después de que un estudio del gobierno federal canadiense reveló que una tercera parte de los pozos rurales de Ontario estaban contaminados por

el E. coli, el gobierno de la provincia eliminó las pruebas relacionadas con este bacilo de su programa de vigilancia del agua potable, abandonando el programa por completo al año siguiente.

Los resultados fueron catastróficos. Brotes de E. coli en cierto número de localidades hizo cundir el pánico en todas las regiones rurales de la provincia de Ontario. En junio del año 2000, se supo de al menos siete personas, una de ellas un bebé, que fallecieron por ingerir el agua de la pequeña localidad de Walkerton. La localidad había subcontratado las pruebas a una planta perteneciente a una compañía privada de Tennessee. El laboratorio en cuestión, A&L Laboratories, descubrió la presencia de este bacilo mortal en el agua pero optó por no comunicar el hecho a las autoridades provinciales, acogiéndose al derecho que le otorgan las nuevas reglas establecidas en nombre del “sentido común.” Un portavoz del laboratorio recordó que los resultados de las pruebas eran “propiedad intelectual y confidencial” y que como tales resultaban ser propiedad exclusiva del “cliente” — es decir los funcionarios de la municipalidad de Walkerton, que no tenían la formación necesaria para saber qué hacer con las pruebas.

EL LIDERATO DEL BANCO MUNDIAL

En el tercer mundo, la situación resulta aún peor allí dónde instituciones financieras internacionales como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se dedican a fomentar a toda costa la privatización del agua. Tal como lo explica Public Services International, estas instituciones deforman el libre albedrío con políticas tales como la de imponer la privatización del agua como condición para la concesión de créditos o ayudas para la cancelación de la deuda, la financiación otorgada a las multinacionales hídricas antes que a las empresas públicas y la venta de los servicios de aguas con vistas a reducir la deuda nacional.

Los proyectos de privatización del agua bajo los auspicios del Banco Mundial, fomentan la creación de monopolios y protegen la corrupción rampante y la extorsión, y a menudo se negocian en el mayor de los secretos. Los acuerdos se consideran “propiedad intelectual” y el público permanece ajeno a sus modalidades. La confabulación con dictadores como Suharto en Indonesia es muy frecuente. El banco suele invertir la parte del león de la inversión mientras que la empresa

se lleva los beneficios. La Suez prometió invertir 1.000 millones de dólares para privatizar el sistema de agua de Buenos Aires, pero terminó invirtiendo únicamente 30 millones; el resto provino de una agencia del Banco Mundial.

Cuando el agua se privatiza, los precios salen al mercado abierto. Como dice el director de la Suez, Sr. During, “Estamos aquí para hacer dinero.” Tarde o temprano la empresa que invierte tiene que recuperar su inversión, lo cual quiere decir que el cliente tiene que pagar por ello. El resultado en el tercer mundo es la exclusión de millones de pobres. Como las compañías están motivadas por el ánimo de lucro y no por el ideal de servir al público, no tienen ningún incentivo para suministrar agua a los pobres.

En la India, algunos hogares llegan a pagar hasta un 25 por ciento de sus ingresos para el agua. El suministro de agua en Manila, Filipinas, fue dividido por el Banco Mundial en dos zonas en 1997, y es administrado por dos consorcios distintos. Uno de estos ellos comprendía a Bechtel y el otro a la Suez Lyonnaise des Eaux. Apenas transcurridos unos meses tras el inicio del nuevo acuerdo, subieron de manera radical los precios al consumo, contrariamente a su promesa de mantener las tarifas bajas, sobretexto de compensación por los ingresos perdidos debido a la crisis monetaria regional. Un año más tarde, la Biwater aumentó las tarifas del agua en Subic Bay en las Filipinas en un 400 por cién.

La empresa multinacional británica Biwater amenazó con denunciar ante los tribunales a unos sindicalistas en Africa del Sur por haberla criticado en la web. Los sindicalistas acusaban a la empresa de una mala administración y de su involucración en el escándalo británico “arms-for-aid” de los años 1980, hecho que había sido documentado por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes británica. El sindicato de trabajadores municipales de Africa del Sur afirma que Biwater está intentando acallar las críticas del público con la esperanza de que le sea adjudicado el primer contrato de agua privada en la historia de Africa del Sur.

La postura del sindicato es inamovible: “la privatización del agua es una cuestión crucial que ha de someterse a debate público. Hay vidas humanas que dependen de la distribución equitativa de los recursos hídricos; el público debe de tener voz y voto a la hora de decidir si quiere que unos

recursos tan críticos como estos sean controlados por una multinacional extranjera cuyo interés primordial reside en optimizar los beneficios... El agua es un recurso imprescindible para la vida y dada su escasez, debe de suministrarse por el sector público y permanecer así en manos de la colectividad. El agua no debe de suministrarse con la intención de hacer beneficios, sino para satisfacer las necesidades humanas.”

La privatización del agua es injusta por muchos motivos. Permite que las decisiones relativas a la distribución del agua giren casi exclusivamente en torno a consideraciones comerciales. Los accionarios empresariales buscan obtener el máximo beneficio, sin tener en cuenta ni el carácter sostenible de los recursos ni la igualdad de acceso. La privatización quiere decir que la administración de los recursos hídricos se funda en los principios de la escasez y de la optimización de los beneficios en lugar del aspecto sostenible de cara al mañana. Las empresas dependen del incremento del consumo para generar beneficios y por lo tanto estarán más dispuestas a invertir en la potabilización del agua marina, el desvío o la exportación de agua, antes que para su conservación.

Por otra parte, la tendencia mundial hacia la reificación de lo que fuera un servicio público reduce la participación de los ciudadanos en las decisiones relativas a la administración de las aguas. Los proyectos de agua privados regidos por el Banco Mundial, por ejemplo, conllevan exigencias relativas a una divulgación mínima sobre su contenido. Un ejecutivo de una empresa de aguas manifestó públicamente en el Foro sobre agua mundial que se mantuvo en la Haya en Marzo del 2000, que mientras que el agua siguiera saliendo del grifo, el público no tenía ningún derecho a saber como llegó hasta allí. La concentración del poder en manos de una única empresa y la incapacidad de los gobiernos de recuperar el dominio de los servicios de suministro permiten a las empresas imponer sus intereses sobre el gobierno, reduciendo así el poder democrático de los ciudadanos.

Los que abogan por la privatización afirman que están buscando crear consorcios entre el sector privado y el público y procuran convencer a los interesados de que los gobiernos seguirán estableciendo las reglas. Sin embargo, como la prestación de servicios de abastecimiento de agua no redunda en sí sola en recetas suficientes, las compañías van buscando acaparar cada vez más el

control exclusivo sobre estos suministros mediante la adquisición de infraestructuras y permisos de explotación. Están logrando evitar la participación del público y creando enormes monopolios contra los cuales los suministradores locales no pueden competir.

Al apoyar la financiación de proyectos a gran escala, el Banco Mundial y otras instituciones de este tipo suelen dar la preferencia a grandes proyectos de infraestructura que abarquen servicios públicos múltiples, en beneficio de las grandes empresas, lo cual conduce a la creación de monopolios. Para mayor insulto, el Banco Mundial está apoyando estas grandes empresas con fondos públicos, y asume los riesgos, mientras que la empresa cosecha los beneficios. Y a menudo ocurre que los gobiernos, que supuestamente representan a su pueblo, tienen que garantizar al accionista que recibirá los ingresos correspondientes. Chile tuvo que garantizar un margen de beneficios del 33 por ciento a la Suez Lyonnaise des Eaux como condición impuesta por el Banco Mundial — cualquiera que fuera el rendimiento.

Pero más preocupante aún es el hecho de que las estrechas alianzas entre los gobiernos, el Banco Mundial y las empresas suministradoras de agua, otorgan a estas empresas una influencia indebida sobre las políticas del gobierno que favorecen sus intereses, tales como la desreglamentación y el libre comercio, y un acceso preferencial a los contratos de suministro que se van produciendo. El objetivo declarado del Banco Mundial cuando concedió un préstamo a las infraestructuras de aguas de Budapest consistía en “amortizar la resistencia política ante la participación del sector privado.” En las Filipinas las empresas suministradoras de agua pueden apelar las decisiones y medidas que el gobierno tome contra ellas ante un panel internacional de arbitraje designado por la Cámara de Comercio Internacional.

Estos contratos apoyados por el Banco Mundial han llegado tan lejos que ahora ya llegan a contener una forma de “seguro democrático.” Un contrato recientemente firmado entre Azurix y el gobierno argentino garantiza el pago al contado por “expropiación” en caso de que un gobierno futuro cambie de idea y desee restablecer los servicios de suministro de agua bajo control público.

LA GUERRA DEL AGUA

En 1998, el Banco Mundial se negó a garantizar un préstamo de 25 millones de dólares para la refinanciación de los suministros de agua en Cochabamba, Bolivia, salvo que el gobierno vendiera su sistema de suministro público al sector privado y que los costes fueran imputados a los consumidores. Tan solo se consideró una oferta y la empresa adjudicataria resultó ser Aguas del Tunari, una filial del conglomerado dirigida por Bechtel, la gigantesca empresa de ingeniería de San Francisco, y por varias otras constructoras.

En Diciembre de 1999, esta compañía privada anunció su intención de duplicar los precios del agua. Para la mayoría de los Bolivianos, esto quería decir que el agua iba a costar más que la comida; para las personas en paro o que percibían el salario mínimo, las facturas de agua de repente pasaron a representar casi la mitad de su presupuesto mensual. Para mayor insulto, el gobierno boliviano animado por el Banco Mundial, concedió monopolios absolutos a concesionarios privados de agua, anunció que apoyaba la tarificación del agua a pleno coste, relacionó el coste del agua con el dólar americano y declaró que no se usaría ni la más mínima fracción del préstamo concedido por el Banco Mundial para ayudar a los pobres a pagar por los suministros de agua. Para poder acceder al agua, incluso la que procedía de los pozos de las localidades, se requerían permisos y los campesinos y pequeños agricultores hasta tuvieron que comprar permisos para instalar captadores de lluvia en sus tierras.

El traspaso de las empresas públicas tales como los transportes, los servicios eléctricos y la educación a empresas extranjeras ha puesto el debate económico al rojo vivo en Bolivia. Pero esto era diferente; las encuestas revelaron que 90 por ciento del público quería que Bechtel desapareciera del mapa. El debate se convirtió en protesta y así se inició una de las primeras “guerras del agua” del mundo.

Dirigido por Oscar Olivera, ex maquinista convertido en activista sindical, un masivo movimiento de trabajadores, campesinos, agricultores y otras personas crearon La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida — en breve La Coordinadora — para “desprivatizar” el sistema de suministros de las aguas locales. Cientos de miles de bolivianos marcharon sobre Cochabamba para

manifestarse contra el gobierno en una huelga general y el paro de los transportes provocó la paralización total de la ciudad. La policía intervino con violencia practicando arrestos y a comienzos de abril, el gobierno declaró la ley marcial. Los activistas fueron detenidos durante la noche y los programas de radio y televisión se interrumpieron en plena emisión. Un joven de 17 años, Victor Hugo Danza, fue muerto por un disparo en plena cara.

Por fin, el 10 de Abril del 2000, los directores de Aguas del Tunari y de Bechtel abandonaron Bolivia, llevando en sus maletas los expedientes de sus empleados más significativos, documentos y computadores y dejando detrás de ellos una empresa desmantelada y endeuda hasta el cuello. Ante las exigencias de la población, el gobierno revocó su tan odiada legislación sobre la privatización del agua. Hondamente afectado por el fracaso del proyecto que había emprendido con tanta ilusión, el gobierno local terminó cediendo sin más la administración de los servicios de agua, SEMAPA a los que protestaban y a La Coordinadora, con deudas y todo.

La gente se hizo cargo de esta nueva dificultad y eligió un nuevo consejo de administración para la compañía de aguas, desarrollando un nuevo mandato anclado en un firme conjunto de principios. La compañía tenía que ser eficaz; incorruptible, justa para con los trabajadores, guiarse por su compromiso hacia la justicia social (abasteciendo primero a los que no tienen agua), y actuar como catalizador para una mayor participación y organización del movimiento popular.

La primera medida de la nueva compañía consistió en poner en funcionamiento una enorme cisterna de agua en los barrios menos favorecidos del sur, instalando cañerías para el abastecimiento de 400 localidades que se habían visto abandonadas por la antigua compañía. Después, la empresa se preocupó de tener una presencia dinámica en los barrios, escuchando a la gente y trabajando con ella para resolver los problemas. En el verano del 2000, La Coordinadora organizó sus primeras audiencias públicas sobre SEMAPA, con el ánimo de emprender un proceso de consulta sobre el establecimiento de una definición ampliamente consensuada sobre el devenir de la empresa, recibiendo gran número de propuestas de la sociedad civil.

La empresa también ha adoptado una postura inflexible en lo que se refiere a cualquier indemnización a Bechtel por sus “pérdidas.” Bechtel ha presentado una demanda contra el

gobierno boliviano por unos 40 millones de dólares USA ante la Corte Internacional del Banco Mundial para la resolución de conflictos sobre inversiones. Invoca sus derechos de “expropiación” en virtud del Tratado bilateral sobre las inversiones que Bolivia firmó con Holanda en 1992. Bechtel, empresa norteamericana, debe de haber intuído que iba a tener conflictos en Bolivia; así pues, a finales de 1999 trasladó su empresa de Tunari de las Islas Caiman a Holanda, obteniendo así el derecho de demandar al país más desfavorecido de toda Sudamérica.

Mientras que el gobierno de Bolivia había declarado oficialmente que presentaría recurso contra esta demanda, hay quienes piensan en el gobierno que la mejor solución sería indemnizar a Bechtel para demostrar que el país está preparado para la mundialización económica y que será un “buen” actor en el escenario de la OMC. Se rumorea con inquietud que el gobierno de Bolivia está negociando un acuerdo amistoso secreto con Bechtel.

En el transcurso de los primeros meses del año 2002, se ha ido observando una pauta harto preocupante de vigilancia, de infiltración, de acoso y agresiones físicas contra los miembros de La Coordinadora. Se sabe claro está que tanto La Coordinadora como SEMAPA tienen poderosos enemigos en los peldaños del poder de los gobiernos del estado y de Bolivia. Si los ciudadanos no fracasaran en administrar su propia empresa de aguas, esto podría servir de advertencia a otros en el mundo para que no se opongan a la privatización del agua y al poder del Banco Mundial.

LAS INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA, GRANDES ACAPARADORAS DEL AGUA

Conflictos parecidos sobre el agua están produciéndose más y más en la industria de la informática en que las grandes empresas están reclamando una porción desmesurada de los suministros de aguas locales. Los fabricantes de computadores utilizan grandes cantidades de agua dulce desionizada para producir sus mercancías y por lo tanto, siempre están buscando nuevas fuentes de agua. Esta búsqueda está enfrentando cada vez más las grandes sociedades de alta tecnología contra las personas económica y socialmente marginadas en la batalla por los recursos locales.

La electrónica es el sector de fabricación de mayor crecimiento en el mundo, según la Silicon

Valley Toxics Coalition. Gigantes tales como IBM, AT&T, Intel, NEC, Fujitsu, Siemens, Phillips, Sumitomo, Honeywell, y Samsung tienen una cifra de venta neta anual que supera el producto interior bruto de muchos países. Si en un principio se pensó que se trataba de una industria no contaminante, la alta tecnología no ha tardado en dejar en poco tiempo un estremecedor legado de polución. El Valle de la silicona tiene más lugares declarados altamente tóxicos por la Ley de protección medioambiental de los EE.UU. que cualquier otra región del país, sin hablar de más de 150 capas subterráneas contaminadas, muchas de las cuales se relacionan con la fabricación de alta tecnología. Casi el 30 por ciento de las aguas subterráneas debajo y en los alrededores de Phoenix, Arizona, ha sido contaminada y bastante más de la mitad es imputable al sector de la alta tecnología.

En la actualidad existen unas 900 plantas de fabricación de condensadores o fábricas de transformación en el mundo que se dedican a producir soportes para los chips informáticos. Otras 140 fábricas están en vías de construcción. Este tipo de fábricas consume una impresionante cantidad de agua. A modo de ejemplo, Intel Fab, que se ubica en pleno desierto cerca de Albuquerque, Nuevo México, tiene permiso para consumir unos 18 millones de litros de agua al día, es decir lo bastante para abastecer una pequeña ciudad.

A este ritmo (incluyendo las nuevas fábricas en construcción) la industria estará consumiendo más de 15.000 millones de litros de agua y produciendo más de 300 mil millones de litros de aguas inmundas cada año. Buena parte de estas nuevas construcciones están teniendo lugar en los países donde hay escasez de agua o en el desierto, pero como dicen los activistas del lugar, “el agua fluye río arriba hacia el dinero.”

La pregunta es: ¿de dónde saldrá el agua? El Southwest Network for Economic Justice y la Campaign for Responsible Technology explican: "En una esfera de tan contados recursos, se inicia una lucha entre los que han disfrutado tradicionalmente de ellos y los recién llegados que contemplan esos recursos con ambición.”

Las empresas de alta tecnología están recurriendo a determinados mecanismos para obtener el derecho de aguas: *tarificación del agua*, con la que la industria puede presionar a los gobiernos

para conseguir subvenciones y los equipos municipales de los servicios de abastecimiento que les permite bombear el agua directamente, con lo cual pagan mucho menos que el precio que le corresponde pagar a las residencias particulares; *prospección minera del agua*, mediante la cual las empresas obtienen los derechos para vaciar las capas acuíferas al tiempo que aumentan los costes de acceso que tienen que pagar los pequeños consumidores tales como las granjas familiares; explotación del agua que permite a la industria adquirir el derecho de aguas de los ranchos y agricultores; y *vertido de desechos*, manera en que la industria contamina las fuentes de agua locales para luego pasar factura a la comunidad.

Pese a la creciente demanda industrial, los programas de conservación dirigidos hacia el ciudadano de a pie no se aplican a la industria. “Mientras que algunos residentes tuvieron que arrancar su césped el año pasado [1996] para ahorrar agua, “ comenta el diario *Albuquerque Tribune* sobre un proyecto de conservación municipal, “el agua corría a raudales por los grifos de la industria.” Mientras los residentes tuvieron que reducir su uso en un 30 por ciento, la Inter Corporation, compañía dedicada a la creación de programas informáticos, tuvo licencia para aumentar su uso en un porcentaje idéntico. Además, Intel paga por el agua cuatro veces menos que los habitantes de la ciudad. Pero la tendencia más preocupante de todas sin embargo, reside en la destrucción deliberada de una acequia — sistema colectivo de irrigación agrícola tradicional en los pueblos — para colmar el insaciable apetito de los colosos de la alta tecnología.

Bajo el nuevo sistema comercial, el agua es arrancada de su tierra de origen para transportarse a lo lejos; esto es un anatema en relación con los usos y costumbres indígenas. Recogiendo las palabras de John Carangelo, mayordomo de la Asociación de la Acequia de La Joya, “en Nuevo México, se supone que cuando el abastecimiento total y limitado del agua ya tiene dueño, el emplazamiento de una industria de alta tecnología depende de la compra de los derechos existentes. Esta alta demanda de agua y los enormes recursos financieros de los que disponen convierten al agua en un preciado producto comercial.” Carangelo advierte que el comercio del agua podría vaciar los campos de América.

Es evidente que las fuentes locales disponibles no bastarán para colmar las necesidades industriales, en vista del empobrecimiento de las capas acuíferas que se está produciendo en

muchas regiones en las que preponderan las industrias de alta tecnología. Las empresas están empezando a buscar nuevas fuentes de agua más allá de sus propios países; el comercio mundial del agua provee una nueva fuente posible. En vista del crecimiento acelerado de las empresas de alta tecnología en el tercer mundo, y particularmente en China, es perfectamente factible que las exportaciones actuales del agua a granel se estén negociando para colmar el voraz apetito que la industria tecnológica mundial tiene por el agua.

EL COMERCIO MUNDIAL DEL AGUA

CANALIZACIONES

Los bucaneros del agua ya tienen la vista puesta también en la exportación del agua a granel mediante mecanismos de desvío, por gaseoductos y oleoductos, y mediante enormes petroleros. Ya se ha procedido a la reconversión de barcos petroleros para distribuir el agua en determinadas regiones que están dispuestas a pagar el precio que sea por el agua que tan urgentemente necesitan. Los petroleros más pequeños llevan cargas de agua dulce a las islas en Las Bahamas, mientras que los de mayor tamaño van camino de Japón, Taiwan y Corea. Turquía se dispone a vender su agua y trasladarla en petroleros y mediante oleoductos reconvertidos desde el río Manavgat hasta Chipre, Malta, Libia, Israel, Grecia y Egipto. En el verano del 2000, Israel entabló negociaciones para la compra de unos 52.000 millones de litros de agua al año de Turquía; los barcos cisterna ya están anclados a proximidad de enormes estaciones flotantes amarillas a dos millas de la costa, aguardando la orden de zarpar. La compañía de las aguas turca afirma que dispone de bombas y de oleoductos suficientes para exportar de cuatro a ocho veces dicho volumen.

Para solucionar los problemas de sequía en los países europeos del Sur, la Comisión Europea se está planteando la posibilidad de obtener agua de los países bien surtidos tales como Austria. Si sus planes para establecer una red hidrográfica europea se hacen realidad, el agua de los Alpes podría fluir hacia España o Grecia, en lugar de a los embalses de Viena en apenas diez años. “Esto quiere decir que, en teoría, podríamos abastecer a todo el mundo en la Unión Europea, es decir a 370 millones de personas,” hace constar Herbert Schroefelbauer, vicepresidente de Verbund, el mayor servicio de suministros hidroeléctricos del país. Un conducto de alta tecnología ya se dedica al transporte de agua de montaña de gran calidad desde los Alpes austriacos hasta Viena, y la propuesta de extender este sistema a otros países está generando muchísima inquietud entre los ecologistas austriacos, que advierten de los daños que estas exportaciones masivas podrían causar al ya vulnerable ecosistema alpino.

Gerard Mestrallet de la Suez Lyonnaise está proyectando un nuevo Canal de Suez — esta vez en

Europa. Ha anunciado su intención de construir un enorme acueducto de 160 millas de longitud para transportar el agua del río Ródano a través de Francia hasta la capital de Cataluña, Barcelona.

Para tratar de solucionar la crisis del agua que se va acentuando en Inglaterra, algunos dirigentes políticos y empresariales están pidiendo exportaciones de agua a gran escala desde Escocia, por medio de petroleros o conductos. Ya hay varias empresas inglesas que están examinando la posibilidad de exportar el agua y un empresario escocés declaró al diario The Scotsman que las empresas escocesas también estaban interesadas. Pero el proyecto se complica por el hecho de las distintas inclinaciones políticas, ya que las canalizaciones escocesas siguen siendo propiedad pública, mientras que el agua inglesa es administrada por empresas privadas. Paradójicamente, algunas de estas empresas no han manifestado mayor interés por las exportaciones ya que la escasez del agua en Inglaterra ha mantenido los precios y beneficios a la alza.

El profesor George Flemming de la Universidad Strathclyde afirma que sería relativamente sencillo prolongar los conductos y las vías marítimas naturales que ya existen entre el norte de Escocia y Edimburgo, hasta alcanzar Londres y otros lugares de Inglaterra. Pero el público escocés no está tan fácilmente dispuesto a renunciar a su soberanía sobre el agua; cuando la administración escocesa de las aguas, la West of Scotland Water, presentó públicamente un plan para vender el excedente de agua a España, Marruecos y Oriente Medio, la reacción pública fue tal que se vió obligada a desistir. No obstante, muchos piensan que estos miedos terminarán por disiparse; Flemming afirma que Inglaterra y el País de Gales están quedándose sin agua por el calentamiento del planeta y que por lo tanto será inevitable importar el agua corriente.

En Australia, la United Water International ha obtenido la adjudicación del contrato del sistema de canalizaciones de Adelaida (en el sur de Australia), desarrollando un plan a quince años para exportar su agua a otros países para las necesidades de la industria informática y la irrigación de los campos. A las empresas nacionales no se les permitió ofertar por este contrato ya que se dió por sentado que hacía falta una gran multinacional para aumentar el valor de la exportaciones de agua, cuya cifra se calcula en unos 628 millones de dólares.

Varias empresas en el mundo entero se encuentran desarrollando tecnologías que les permitan

cargar enormes cantidades de agua dulce en grandes sacos herméticos que se remolcarán a través de los mares. La compañía de aguas Nordic Water de Oslo, Noruega, ha firmado un contrato para la entrega de siete millones de metros cúbicos de agua al año en bolsas al norte de Chipre. Durante la Guerra del Golfo, la Operación Tormenta del Desierto utilizó este tipo de sacos de agua para abastecer a las tropas.

La Aquarius Water Trading and Transportation Ltd. de Inglaterra y Grecia han empezado las primeras entregas comerciales de agua dulce en bolsas de poliuretano que son remolcados por las vías marítimas. La empresa, entre cuyos inversores figuran la Suez Lyonnaise des Eaux, suministra agua a las islas griegas mediante un sistema de canalizaciones que conecta la bolsa al principal canal de abastecimiento de la isla. Aquarius predice que el mercado no tardará en superar los 200 millones de toneladas métricas al año. La flota de bolsas de la empresa se compone de ocho bolsas de 720 toneladas cada una y de dos bolsas de 2.000 toneladas/unidad. Las bolsas más grandes tienen una capacidad de dos millones de litros de agua cada una. Aquarius ha investigado la posibilidad de desarrollar bolsas diez veces mayores y está en busca de capitales para poder producirlas. La empresa tiene puesta su mira en Israel, y dice que diversas grandes empresas de agua se interesan en el proyecto.

Pero nadie se atreve a albergar sueños tan ambiciosos para el comercio del agua como Norteamérica. Cada pocos años surgen proyectos para desviar cantidades masivas de agua canadiense a las regiones donde escasea en EE.UU., hacia el Oriente Medio, por petroleros, gaseoductos, oleoductos o mediante el desvío de los cursos naturales de los ríos, pero son rápidamente desestimados en vista de las protestas del público.

Uno de los mayores proyectos de desvío que se han propuesto era el del GRAND Canal — Great Recycling and Northern Development Canal, o Gran Canal de Reciclaje y de Desarrollo del Norte. Exigía en un principio la construcción de un dique desde la Bahía James hasta el estuario de la Bahía de Hudson (ambas fluyen hacia el norte) para crear un gigantesco embalse de agua dulce procedente de la Bahía de James y de los veinte ríos que allí desembocan. Se pretendía construir una interminable serie de diques, canales, presas, centrales hidroeléctricas y esclusas para desviar el agua a razón de unos 186 mil litros por segundo río abajo por un canal de 167 millas hasta la bahía

Georgian, donde se trasvasaría para pasar por los Grandes Lagos y llegar hasta el Sun Belt de la EE.UU.

Otro gran proyecto de esta índole fue el de la NAWAPA — la North American Water and Power Alliance (Alianza Norteamericana del Agua y de la Energía Hidroeléctrica). El plan original consistía en construir un sinfín de poderosas presas para poder recoger las aguas de los ríos Yukón, Peace y Liard en un enorme embalse que inundaría una décima parte de Columbia Británica para crear un canal desde Alaska hasta el estado de Washington y abastecer a treinta y cinco estados americanos a través de los canales y conductos existentes. El volumen del agua desviada equivaldría por así decir al caudal medio anual del río San Lorenzo.

A principios de los 90, un consorcio denominado Multinational Water and Power Inc. desembolsó 500.000 dólares para fomentar el desvío del agua del tramo norte del río Thompson (afluente del Fraser) hacia el río Columbia para su distribución por conductos a California.

A lo largo de este último decenio estos proyectos han ido recabando el apoyo del sector empresarial canadiense. En 1991, la revista *Canadian Banker* vaticinaba que la exportación del agua se convertiría en un negocio multimillonario: “el concepto de la NAWAPA...sigue siendo un increíble catalizador que podría potenciar el cambio económico y medioambiental.”

En ese mismo año, la revista *Report on Business* señalaba: " En los próximos diez años, se espera que la contaminación, la explosión demográfica y las cruzadas contra el medio ambiente contribuyan a la escasez progresiva del suministro mundial de agua dulce. Algunas de las principales empresas técnicas del Canadá se están preparando para el día en que el agua se transporte alrededor del mundo como si se tratara de petróleo, trigo o madera...lo que contará entonces es saber quién tiene el derecho de vender el agua al mejor postor.”

Entretanto, los habitantes de las regiones donde el agua escasea siguen sin darse por aludidos. En un artículo publicado en la revista *The Atlantic Monthly* de julio de 1998, bajo el título "Desert Politics," (la política del desierto) el autor Robert Kaplan hace constar que los habitantes del desierto de Arizona se dejan llevar por una fé ciega en alguna solución milagrosa o panacea que

pondrá fin a la escasez de agua, y no por ello dejan de construir en una región que nunca estuvo preparada para albergar a tantísimos seres humanos. Subraya que más de 800 mil personas residen en Tucson y alrededores y unos cuatro millones de habitantes en Arizona, habiéndose multiplicado su población por diez en setenta años. De acuerdo con Wade Graham del *Harper's Magazine*, los proyectos de urbanismo en Phoenix se desarrollan al ritmo de un acre por hora.

"Quién sabe si, como opinan ciertos ingenieros visionarios, la salvación del Suroeste no termine por llegar de la fría inmensidad de esa esponja verde y húmeda que hay en el norte: Canadá. De ser así, toda una red de nuevas presas, embalses y túneles estarían suministrando el agua del Yukón y de Columbia Británica a la frontera mexicana, mientras que un gigantesco canal acarrearía el agua potabilizada de la Bahía de Hudson desde Quebec al medio oeste americano, y los superpetroleros cargarían con el agua de los hielos del norte desde la costa de Columbia Británica hasta el sur de California — todo ello para alimentar una creciente red de vainas en las que se oye los latidos de la actividad económica de un mundo post-urbano y multi-étnico, “ escribe Kaplan.

¿CANADÁ Y ALASKA: LA OPEC DEL AGUA?

Tras unos años de silencio la llamada a la exportación del agua por superpetroleros ha salido de su letargo y vuelve a ser foco de debate en Canadá. En Columbia Británica, algunas empresas de exportación tales como la Western Canada Water, Snow Cap Water, White Bear Water y Multinational Resources ya lo tenían todo listo para el negocio cuando el gobierno prohibió la exportación del agua a granel en 1993. Uno de los proyectos iba a contar con la participación de una compañía texana que estaba dispuesta a adquirir una flota de doce a dieciseis de los mayores superpetroleros del mundo (500 mil toneladas de tara) que iban a funcionar sin interrupción. En virtud de dicho contrato, el volumen anual de agua que iba a ser trasladada a California hubiera sido equivalente a la del consumo anual total de la ciudad de Vancouver.

El gobierno que tomó la decisión de prohibir la exportación de agua a granel se había comprometido a adoptar esta postura, aunque la opinión pública no estaba muy a favor suya por motivos que nada tienen que ver con esta ley. Un futuro gobierno en dicha provincia pudiera

facilmente dar marcha atrás y cambiar esta política, abriendo así las compuertas para desatar una inundación de propuestas de exportación. El experto hidrográfico canadiense Richard Bocking explica que las mismas compañías se dedicarían al transporte del petróleo y del agua, en ciertos casos, vaciando el petróleo en un tramo del recorrido, y llevando agua en el tramo de regreso.

"Las exportaciones de agua de la costa de Columbia Británica necesitarían de enormes superpetroleros en funcionamiento a lo largo del año y con un programa muy apretado. Se abrirían camino a través de las sinuosas vías marítimas del litoral, maniobrando alrededor de las islas y arrecifes en una región donde aún no se ha desarrollado un buen sistema de control del tráfico marítimo. Tendrán que hacer frente a corrientes y mareas fuertes y a menudo turbulentas en pequeñas calas costeras donde los vientos invernales suelen alcanzar tremendas velocidades.

"Estos enormes petroleros viajarían por unas aguas que figuran entre las más codiciadas del mundo por sus posibilidades recreativas, la navegación y la pesca. Las bandas de orcas se desplazan regularmente en estas aguas. Aparte de sus increíbles posibilidades de pesca comercial y deportiva, esta región es donde se produce el desove de prácticamente toda la industria de la ostra del litoral de la provincia. Las enormes cisternas de los superpetroleros van cargadas de fuel-oil, que es la peor categoría de petróleo ecológicamente hablando. Considerando los apretados programas de los buques que además deben lidiar con las corrientes, los vientos y los arrecifes se puede decir que se dispone de todos los ingredientes para asistir a tragedias de gran escala."

En los últimos años, otras dos provincias canadienses han recibido solicitudes por parte de empresas para permitir la exportación del agua a granel con fines lucrativos. En la primavera de 1998, el Ministerio de Medio Ambiente de Ontario, aprobó un plan sometido por el Nova Group que pretendía exportar millones de litros de agua del Lago Superior por petroleros hasta el Asia. No obstante, la provincia terminó por rescindir la licencia ante una masiva protesta de la International Joint Commission, de la entonces Secretaria de Estado de los EE.UU., Madeleine Albright, y del público. La otra solicitud, que pretendía exportar 52.000 millones de litros de las aguas prístinas al año del Lago Gisborne, perdido en la naturaleza salvaje de Terranova, parecía estar a punto de obtener luz verde cuando un público furioso obligó al gobierno a retraerse a finales de 1999, apenas unos meses antes de la fecha en que debían empezar las exportaciones.

La empresa, McCurdy Group de Terranova tenía intención de hacer llegar el agua a Oriente Medio por superpetroleros.

Las crónicas y artículos de los periódicos y revistas especializadas están dando mayor intensidad al debate. En febrero de 1999, el *National Post* calificaba el agua del Canadá de “oro azul” y exigió que el gobierno “cerrara el grifo.” El comentarista de su sección de negocios, Terence Corcoran, añadió leña al fuego: “Canadá es una futura OPEC del agua. Propongo una apuesta a largo plazo que bien vale la pena: de aquí al 2010, Canadá estará exportando enormes cantidades de agua dulce a los EE.UU. y recurriendo a los petroleros para abastecer a los países sedientos del mundo entero.

"La cuestión no residirá en saber si hay que exportar o no, sino en la cantidad de dinero que el gobierno federal y las provincias estarán en disposición de obtener de los envíos masivos de agua. En lugar de oponerse a la idea de la exportación del agua, Canadá terminará haciendo cambalaches para encabezar el WWET, Tratado Mundial sobre la Exportación del Agua, que veinticinco países con sobradas reservas de agua firmarán en el 2006. Siguiendo el modelo de la OPEC, intentarán crear un cartel del abastecimiento mundial del agua para disparar su precio.” Este punto de vista lo reitera el Consejo de Redacción del *Calgary Herald* afirmando que “ya que Canadá dispone de tantísima agua dulce, que empiecen las exportaciones comerciales.”

No obstante, Canadá no es la única región rica en agua codiciada por las multinacionales. Una compañía canadiense, la Global Water Corporation, ha firmado un acuerdo con Sitka, Alaska, para la exportación anual de 58 mil millones de litros de agua de los glaciares a China donde será embotellada en una de las áreas de libre comercio más notorias del país por el ahorro de mano de obra. Aún cuando el folleto de la compañía reconoce la existencia de una grave crisis del agua en China, anima a los inversionistas a “cosechar todo lo que puedan lo antes posible de esta magnífica oportunidad ya que las fuentes de agua que se conocían en el mundo se están empobreciendo y deteriorando cada vez más” y deplora el hecho que el gobierno de Columbia Británica haya prohibido la exportación de agua a granel.

La compañía se está dedicando ahora a establecer una “alianza para planificar una estrategia internacional para el transporte del agua en grandes petroleros a escala mundial” con Signet, una

compañía internacional de transporte marítimo con sede en Houston, Texas. Signet se ha estado dedicando al transporte masivo del agua desde 1986 cuando la Western Canada Water y su predecesor contrataron los servicios de dicha compañía para el “diseño, desarrollo, análisis e implantación de un sistema internacional para el transporte del agua.” Como lo explica Global, “el agua ha pasado de ser un producto inagotable que se daba por sentado para convertirse en una necesidad racionada que puede ser tomada por la fuerza.”

Pero la Global es tan solo una del extensísimo elenco de compañías que se interesan por el agua de Alaska, cuyo gobierno se ha convertido en el primero del mundo en permitir la exportación de agua a granel. La revista *Alaska Business Monthly* dice sin rodeos: “ todo el mundo está de acuerdo con que el agua de Alaska tiene grandes posibilidades de exportación en el siglo XXI, y las diversas localidades, desde la isla de Annette hasta las Aleutianas están pensando en cerrar el grifo. “La revista informa que una empresa de Washington ha empezado a transportar el agua municipal a granel desde Alaska a Kent, Washington, para ser embotellada, y que muchos otros proyectos están en marcha.

Los recursos hídricos de Alaska son inmensos, informa la revista partidaria de la exportación *Alaska Business Monthly*. Hace constar, por ejemplo, que si Sitka llenara un petrolero con unos tres millones de litros al día, esto seguiría representando menos del diez por ciento de su consumo actual. En Eklutna, Brian Crewdson, director adjunto de la administración de las aguas de Anchorage, o Anchorage Water and Wastewater Utility, calcula que las posibilidades de exportación alcanzan hasta 90 millones de litros al día.

Crewdson señala que en 1995 un petrolero fletado por Mitsubishi para el transporte de productos derivados del petróleo para su transformación en el extranjero aprovechó para cargar unos seis o siete millones de litros del agua de Eklutna con destino a Japón. Piensa que esto puede haber sido el primer traslado de agua por petrolero de EE.UU. y cuando se supo la noticia, recibió llamadas de empresas interesadas en hacer negocio en Nueva York, en la ciudad de Washington y en Charleston, Carolina del Sur. Crewdson añade que se puede hacer más dinero con la exportación de agua a granel que con la embotellada.

Un empresario decidido a enriquecerse con la exportación del agua de Alaska, ha dedicado gran parte de su carrera a ejercer su influencia en la acuñación de las políticas del sector público sobre el agua. Ric Davidge, presidente de la Arctic Ice and Water Exports, trabajó en el Ministerio del Interior de los EE.UU. como presidente del grupo de Política de las Tierras Federales y ejerció como asesor clave tanto para el gobierno federal como para el del estado de las operaciones de limpieza de la marea negra producida por el Exxon Valdez. En su calidad de director de recursos hídricos de Alaska, Davidge se ocupó de iniciar la comercialización del agua del estado y estableció el marco político que permitió la exportación del agua. Poco después de haber puesto en movimiento las ruedas de la exportación, pasó a trabajar en el sector privado empezando una compañía de exportación de agua. Ahora se le conoce como el “zar del agua de Alaska.”

En el curriculum de Davidge se puede leer que provee una “amplia gama de servicios de asesoría a las empresas nacionales y extranjeras deseosas de desarrollar la exportación de agua de Alaska, ya sea a granel o embotellada.” Entre sus clientes figuran empresas de Arabia Saudí., Taiwan, Alaska, Washington, Canadá, Corea del Sur, Tanzania, Japón, México, California y Nevada.

Hay quién afirma que la exportación de agua a granel es demasiado costosa para ser económicamente viable, sugiriendo que el futuro está en la desalación o potabilización del agua marina. El Banco Mundial recuerda no obstante que el mundo ya ha gastado sus reservas de agua asequibles y fácilmente accesibles; los costes financieros y medioambientales que supone la obtención de nuevos suministros, cualquiera que sea la forma en que se desarrolle, serán de dos a tres veces mayores que los de las inversiones actuales, pero por onerosa que sea esta propuesta, la demanda estará allí.

Aunque algunos países terminarán recurriendo a la desalación, se trata de un procedimiento extremadamente costoso, y que precisa de un gran volumen de carburantes fósiles. Los únicos países en medida de contemplar proyectos de desalación o potabilización masiva serían los que disponen de abundantes fuentes de energía, sin olvidar que estos proyectos recrudecerían el calentamiento del planeta — que es justamente la crisis que está siendo agravada por la penuria de agua dulce.

Davidge recuerda que el precio del agua a dólar unidad ya es más alto que el de la gasolina una vez refinada. “La carestía promete ser total, desde las bebidas gaseosas al vino francés pasando por los microchips cuyos precios se dispararán a medida que las reservas de agua potable se irán agotando.” Aduce que es más oneroso y más destructivo para el medio ambiente producir agua potabilizada que transportar agua a granel en petroleros y sacos de agua.

El empresario de Quebec Paul Barbeau de Aquaroute, Inc., compañía “dedicada al transporte de agua corriente” está de acuerdo con este punto de vista. Afirma que el agua se puede exportar fácilmente por petrolero casi sin previo aviso. Informa que en su empresa anterior, Enercem Tankers, convirtió un petrolero en un navío de transporte de agua que fue usado para trasladar agua del Canadá a las Bahamas. “Captar el agua es tarea fácil. Basta que una embarcación a flote bombee lo que se puede declarar como lastre. Esto se hace todos los días en cualquier embarcación que circula por la costa o en alta mar o aún más sencillamente para cualquiera de los remolques que ya navegan por los Grandes Lagos. Ya disponemos de las herramientas necesarias para la exportación del agua a flote. Lo que nos falta es que se legisle esta actividad con precisión para impedir prácticas piratas.”

Algunos ecologistas han llegado a creer que la reificación y el comercio del agua resulta inevitable. Según Allerd Stikker, "es muy probable que a principios del siglo XXI, el agua potable empiece a convertirse en una gran mercancía regional e interregional, que se produzca y se negocie en volúmenes impensables hoy día.”

Sobre todo a la luz de la mundialización económica, el pensar que los traslados transfronterizos masivos de agua no es económicamente viable, es un mito. La única diferencia entre éstos y otros megaproyectos estriba en que el agua se convierte en un producto que se traslada de un lado de la frontera a otro. El propósito de estos megaproyectos es idéntico al de los proyectos de agua doméstica y se rigen por el mismo análisis económico. No hay motivo para pensar que los subsidios masivos que el gobierno concede a las actividades industriales y agropecuarias se vayan a acabar en un futuro próximo. Las grandes multinacionales que se dedican a industrias que exigen muchos recursos hídricos esperarán de sus gobiernos respectivos que encuentren y financien los suministros de agua que necesitan antes de tomar decisiones relativas a las inversiones y a la

producción.

EL AGUA EMBOTELLADA SE CONVIERTE EN UN GRAN NEGOCIO

Allí donde existe una demanda para el comercio transfronterizo del agua, el negocio está en plena marcha. El comercio del agua embotellada es una de las industrias de mayor expansión (y de las menos reglamentadas) del mundo. En los años 70, el volumen anual alcanzaba los 900 millones de litros. En los 80, esta cifra hizo más que doblar, colocándose en unos 1900 millones de litros, y para finales de la década, el mundo estaba consumiendo seis mil millones de litros de agua embotellada cada año. Pero estas cifras se quedan cortas en comparación con la explosión de las ventas de agua embotellada de los últimos cinco años — que aumenta a un ritmo anual superior al veinte por ciento. En el año 2000 se embotellaron y comercializaron más de 24.000 millones de litros en el mundo, de los cuales un noventa por ciento en recipientes plásticos no retornables o reciclables.

En Canadá, la cantidad de agua extraída por los embotelladores ha crecido en más de cincuenta por ciento en menos de una década; los embotelladores, que no pagan tarifa alguna por el agua que obtienen, tienen el derecho legal de extraer unos 30.000 millones de litros al año — o sea, mil litros por cada habitante del país. Casi la mitad de este agua se exporta a los EE.UU.

A medida que se va deteriorando cada vez más el agua dulce que existe en el mundo, los que pueden permitirse el agua embotellada están a favor de esta fórmula, pese al hecho de que el agua embotellada no es sometida a unas pruebas y normas de pureza tan rigurosas como las del agua de grifo. Un estudio realizado en marzo de 1999 por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC) de los EE.UU., halló que buena parte del agua embotellada es igual de segura o insegura que el agua de grifo, y en algunos casos lo es bastante menos. Un tercio de las 103 marcas de agua embotellada que fueron objeto de este estudio estaban más o menos contaminadas, encontrándose indicios de arsénico y de E. coli; el estudio determinó asimismo que al menos en una cuarta parte de los casos, el agua embotellada no resulta más que ser agua de grifo.

Junto con los colosos de la industria, tales como Perrier, Evian, Naya, Poland Spring, Clearly Canadian, La Croix y Purely Alaskan, existen literalmente miles de pequeñas compañías que se dedican a este negocio. Además empiezan a pegar fuerte las grandes empresas de bebidas gaseosas. La Pepsi ha lanzado su gama Aquafina y Coca-Cola acaba de lanzar la versión norteamericana de su marca internacional Bon Aqua, bajo el nombre de Dasani. Coca-Cola predice que su agua embotellada, que no es más que agua de grifo depurada y que es más cara que la gasolina, terminará dando mayores beneficios que sus bebidas gaseosas antes de que acabe la década.

Estas empresas no escatiman esfuerzos en seguir buscando nuevas fuentes de agua para calmar el insaciable apetito del negocio y se dedican al comercio del agua que se transporta en petroleros, y a comprar los derechos de aguas de los agricultores. En las localidades rurales de todo el mundo, las empresas están comprando tierras agrícolas para tener acceso a los pozos y abandonarlos en cuanto se secan. En América del Sur las empresas hidrográficas extranjeras están adquiriendo grandes pedazos de naturaleza salvaje e incluso sistemas hidrográficos integrales que pretenden guardarse en la manga para desarrollo futuro.

A veces ocurre que estas empresas agotan por completo no sólo los sistemas de su propio terreno sino que también los de la región circundante. Un acalorado debate ha estado teniendo lugar en Tillicum Valley, pintoresca región de huertos y viñas de Columbia Británica. Es evidente que la Canadian Beverage Corp. ha estado explotando el agua subterránea de la región de manera tan incansable que los habitantes y los hortelanos del lugar dicen que la compañía está “dejándoles secos.”

Por supuesto, las diferencias en los ingresos mundiales se reflejan en un acceso desigual al agua embotellada. El NRDC informa que algunas personas gastan hasta 10.000 veces más por cada tres litros de agua embotellada que para el agua del grifo. Por el mismo precio que el de una botella de este artículo de lujo, se podría abastecer a los hogares 3.000 litros de agua de grifo, según la American Water Works Association. Paradójicamente la mismísima industria que contribuye a destruir las fuentes de agua públicas — con objeto de abastecer agua “pura” a la élite mundial en plástico no reciclable — presume de tener un producto que no hace daño a la naturaleza y que forma parte de un estilo de vida sano.

EL FRACASO DE LOS GOBIERNOS

MEDIDAS TAN ESCUETAS COMO INOPORTUNAS

Los gobiernos en todo el mundo han coincidido en no saber reconocer la crisis que padecían los recursos hídricos del mundo y en su falta de planificación para tomar medidas en previsión del estado de urgencia que se avecina.

Es cierto que los países industrializados se han apuntado algunos éxitos en el saneamiento de los ríos, lagos y estuarios que se habían convertido en verdaderas alcantarillas y focos de contaminación industrial. El río Hudson en los EE.UU. había sido dado por muerto, y ahora rebosa de vida. Los ciudadanos y los gobiernos han trabajado para prohibir el vertido de las peores toxinas tales como el DDT en nuestra aguas, y en diciembre del 2000 se firmó un tratado histórico prohibiendo la presencia de los agentes contaminantes orgánicos de mayor persistencia. Se obligó asimismo a la limpieza parcial de los flujos industriales tales como los desechos de las fábricas de pasta de papel.

Por ejemplo, los científicos del mundo entero están estudiando la manera de sanear los Grandes Lagos al menos parcialmente, en un esfuerzo conjunto de las provincias y de los Estados que los rodean. Allá por 1972, al descubrirse que su estado de deterioro se debía en gran parte a la presencia de fósforo en sus aguas, los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos firmaron el Acuerdo sobre la calidad del agua de los Grandes Lagos, que impidió radicalmente que el fósforo y las alcantarillas municipales fueran a parar a los Lagos.

Los esfuerzos de conservación en Europa y Norteamérica han resultado asimismo en una reducción del consumo del agua utilizada en los hogares y en el sector industrial, ayudando a aminorar la marcha del agotamiento de las capas acuíferas. El consumo de agua ha llegado a bajar en algunas regiones y sectores industriales en EE.UU. de un 10 hasta un 20 por ciento desde 1980, según el Instituto geológico de los EE.UU., la United States Geological Survey. En la última década, los gobiernos han mantenido encuentros de manera regular para intentar solucionar los diversos

factores que componen la crisis: empobrecimiento, contaminación, saneamiento e igualdad de las condiciones de acceso.

Las Naciones Unidas dieron a los años ochenta el nombre de Década Internacional del Abastecimiento y Saneamiento del Agua Potable y lograron importantes avances en lo que se refiere a proveer infraestructuras y agua potable a algunas de las localidades en que el problema era más acuciante. Pero la ONU se lamenta que la falta de fondos está poniendo esta campaña en grave peligro y que, al ritmo actual, el mundo tendrá que esperar hasta el año 2100 para poder contar con una cobertura completa de los servicios.

Una conferencia mantenida en Irlanda en el año 1992 dió por fruto una declaración de principios — la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible. Este instrumento sirvió de fundamento al capítulo sobre el agua de Acción 21, el plan de acción mundial que se desarrolló con motivo de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. Estos principios reconocen la necesidad de proteger los ecosistemas acuáticos y lanzan un llamamiento a los gobiernos para que planifiquen a más largo plazo las medidas de protección de sus recursos de agua dulce. La Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible emprendió por su parte una valoración exhaustiva del agua dulce existente en el planeta. El informe, presentando ante la Asamblea General de 1997, subraya los campos en que se imponen medidas urgentes, y ruega a la Organización que facilite el dialogo entre los gobiernos para una acción concertada a favor del desarrollo sostenible.

Por muy significativas que sean estas medidas, distan de ser lo bastante suficientes o coordinadas como para poder hacer contrapeso a los otros tipos de acción, o mejor dicho, inacción por parte de los gobiernos. Como dijo Klaus Topfer del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente con motivo de una conferencia sobre el agua mantenida en París en marzo de 1998, "La fragmentación de los poderes sobre el agua que se reparten entre una infinidad de sectores y ministerios tanto a escala nacional como internacional, ha resultado en la ausencia de una visión común sobre el consumo sostenible de este recurso vital."

La ONU hace resaltar la poca prioridad que tanto los gobiernos de los países industrializados como

los de los países en desarrollo otorgan a las cuestiones relativas al agua y a las instituciones que se ocupan del tema; los fondos destinados a la investigación y a la búsqueda de soluciones en este campo son totalmente insuficientes. La gestión del agua dulce se encuentra aún en pañales y, desgraciadamente, en el mundo entero se observa una falta de compromiso político y de concienciación del público.

Mientras tanto, los gobiernos y la industria siguen con sus prácticas destructivas. Como muchos gobiernos del Norte han prohibido la venta y el uso de toxinas como el DDT dentro de sus fronteras, ciertas multinacionales con sede en estos países siguen dedicándose a la fabricación de estos productos químicos harto tóxicos, sólo que lo hacen en el extranjero, con lo cuál su uso está en plena expansión en el tercer mundo. Se pueden detectar rastros de estas toxinas en los ecosistemas de prácticamente todos los países del planeta, inclusive en las tierras supuestamente vírgenes. Los pesticidas, herbicidas, fungicidas y las hormonas son de uso corriente en la agricultura del mundo entero. Mientras que la voz de algunos grupos ecologistas y los colosales costes financieros han entumecido el entusiasmo por los megaproyectos como la construcción de presas y de estaciones hidroeléctricas en algunos países, otros no cejan en sus esfuerzos por introducir la megatecnología moderna.

Los gobiernos están dejando en el tintero otra importante causa de la pérdida de agua: la que se escapa de las infraestructuras municipales y de los canales de irrigación. Estos problemas son particularmente graves en el tercer mundo, debido a que sus gobiernos se han empobrecido aún más tras la fusión financiera mundial. El Banco Mundial informa que en estos países, se desperdicia al menos 50 por ciento del agua municipal por estos escapes. Por ejemplo en Manila, Filipinas, el 57 por ciento del agua municipal se pierde por motivo de estos escapes y por robo. En los países en desarrollo, informa *World Resources*, de 60 a 75 por ciento del agua destinada a la irrigación no llega jamás a su destino.

En los países industrializados, que disponen de toda suerte de tecnologías y de recursos para introducir mejoras, los gobiernos están efectuando recortes en los gastos de obras públicas y destripando las leyes medioambientales en nombre de la competitividad mundial. Las canalizaciones ya medio podridas de los barrios bajos del primer mundo van deteriorándose cada

vez más. En Inglaterra, por ejemplo, el Worldwatch Institute calcula que una cuarta parte del agua que pasa por los canales de distribución se pierde debido al mal estado de las cañerías y a otros problemas de esta índole. Hasta que decidió ocuparse de este problema, la ciudad de Boston, Massachusetts, perdía casi un 40 por ciento anual de sus abastecimientos municipales, por abandonarlos a su suerte.

Los Canadienses derrochan el agua sin contemplación alguna. El hogar medio gasta unos 500.000 litros al año, de los cuáles la mitad se desperdician lavando automóviles o dejando gotear los grifos. El gobierno canadiense calcula que tendrá que desembolsar unos 80 mil millones de dólares canadienses para reparar las infraestructuras hidrológicas en vías de deterioro.

Bastarían diez años y un esfuerzo concertado por parte de los gobiernos del mundo para dar un giro de 180 grados a esta pauta de desperdicio. Con las tecnologías y los métodos de los que se disponen hoy día, se puede calcular sin temor a equivocarse que la agricultura podría cortar sus exigencias de agua en un 50 por ciento, las industrias de un 50 a un 90 por ciento, y las ciudades en un tercio, sin sacrificar en lo más mínimo el nivel de vida o la producción económica. Lo que hace falta es una voluntad y una visión política.

Por otra parte, millones de personas mueren cada año por el agua contaminada porque los gobiernos no permiten a las localidades que administren sus propios recursos. Un estudio realizado en marzo de 1999 conjuntamente por el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace resaltar que los programas de ayuda internacional canalizan demasiado dinero a través de los gobiernos y organismos, y no dejan que las localidades administren sus propios sistemas, ya que no se fían de ellas. El informe también acusa a los gobiernos y a los organismos internacionales de obligar a las localidades a abrazar las nuevas tecnologías, aún cuando éstas no tienen medios para ocuparse de su mantenimiento. Como ejemplo ilustrativo de una medida que puede funcionar, señala el proyecto piloto que se ha llevado a cabo en Uttar Pradesh, el estado más poblado y menos desarrollado de la India, en que los habitantes de los pueblos escogen sus propios comités de administración de las aguas y controlan el correspondiente presupuesto público. Estos proyectos piloto han venido a costar dos terceras partes menos que los que dependían del consejo gubernamental de administración de las aguas.

A los gobiernos también se les puede achacar el subsidio masivo del sistema de transporte mundial que soslaya la mundialización económica del planeta. Valga como ejemplo el comentario de Victor Menotti que recuerda que si el coste del transporte ida y vuelta de los bienes de consumo expedidos a través de los mares para su transformación se reflejara en el precio de venta al público, retrocedería de manera significativa el volumen de los intercambios comerciales en el mundo.

Los gobiernos financian el sector de la alta tecnología de muchas maneras, y recordemos que este sector consume muchísima agua. La ciudad de Austin, Texas, no sólo concede incentivos fiscales a las empresas del sector (ejemplos más recientes: 125 millones de dólares a Samsung y 56 millones a Sematech), sino que también les ofrece tarifas reducidas en lo que se refiere al pago del abastecimiento de agua. Las tarifas que paga el sector industrial en Austin son dos terceras partes inferiores a las que pagan los residentes. Hace poco, Intel recibió un incentivo fiscal por valor de ocho mil millones de dólares para su fábrica de Río Rancho en Nuevo México, en forma de obligación pagadera mediante sus ingresos industriales, y otros 250 millones de dólares en forma de deducciones fiscales y otras subvenciones. La Southwest Network y la Campaign for Responsible Technology indican en su informe *Sacred Waters (Aguas Sagradas)*, que "La mayor forma de exteriorizar el coste del agua...reside en la reducción de las tarifas del agua, los subsidios destinados a las infraestructuras de abastecimiento y depuración del agua, y el acceso restringido al agua de los consumidores de pocos ingresos que tradicionalmente utilizaban el agua debido a su uso masivo en el sector industrial."

Además, y debido a la ausencia de legislación, o tan siquiera de debate en la mayoría de los países, la privatización del agua y de los servicios de alcantarillado aumenta progresivamente. Merced a los consorcios formados entre el sector público y privado, las municipalidades de muchos países están logrando hacer que las líneas que dividen los intereses de las compañías privadas y los gobiernos democráticamente elegidos, se vuelvan confusas. Estos "consorcios" a menudo no son más que el primer paso hacia la privatización integral. Y como muchas de las empresas proveedoras de estos servicios son las mismísimas que terminarán dedicándose a la exportación masiva de agua a granel, a la construcción de presas y al desvío de los cursos de los ríos, los gobiernos les dan acceso a los recursos hídricos por la puerta de atrás.

LA COMPRA Y EL COMERCIO DEL DERECHO DE AGUAS

Los intercambios comerciales del agua se encuentran en expansión en muchas partes del mundo, generalmente con el visto bueno y la bendición de los gobiernos. En Chile, donde la privatización es una meta del gobierno, las compañías de agua están comprando el derecho de aguas de los agricultores para venderlos a las ciudades. En el tercer mundo, son moneda corriente los intercambios amistosos y de poca monta entre los agricultores. Mientras que estos intercambios se realicen entre los granjeros y las localidades, el sistema puede funcionar de manera justa. Pero en el momento que esta práctica quede desreglamentada, puede servir a disparar el precio del agua suministrada a los pobres, como a menudo suele ocurrir. Cuando las grandes empresas entran en el juego, suelen comprar el derecho de aguas en bloque, agotar los recursos de la región, y pasar a otra.

Una práctica parecida ya es habitual en la industria de la pesca. Las grandes empresas están comprando las licencias de pesca otorgadas por el gobierno, licencias conocidas como cuotas individuales transferibles — título que puede ser alquilado o vendido, permitiendo al titular capturar determinada cantidad de peces. Concebido en un principio por los gobiernos para controlar la sobrepesca, estas licencias están logrando ahora concentrar la industria pesquera en manos de un puñado de gigantescas pesquerías que fomentan las prácticas de pesca destructivas y están ahogando a las pequeñas localidades. Como dijo un pescador de Terranova que se quedó sin trabajo, “por primera vez en la historia, los peces tienen propietario antes de convertirse en pescado.”

En California, el comercio del derecho de aguas se está convirtiendo en un negocio de lo más lucrativo. En 1992, el Congreso de los EE.UU. aprobó un proyecto de ley que permitía a los agricultores, por primera vez en la historia del país, a vender su derecho de aguas a las ciudades. En 1997, el Secretario del Interior Bruce Babbitt anunció planes para abrir un importante mercado de agua a los consumidores del río Colorado. El nuevo sistema permitiría la venta entre estados del río Colorado y los consumidores del sur, es decir Arizona, Nevada y Clifornia.

Wade Graham (del *Harper's Magazine*) define esta medida como “la mayor desregulación de un recurso nacional desde la promulgación de la ley de concesión de territorios (Homestead act) de 1862” y añade que lo único que faltaba era la privatización de todas las tierras federales de los EE.UU. Babbitt cuenta con que el mercado libre consiga lo que los políticos y los tribunales nunca lograron hacer — servir de árbitro en las numerosas demandas relativas al agua del río Colorado.

Los tratos serán seguramente de poca monta al principio (Nevada ya ha tomado disposiciones para pagar a Arizona por el almacenamiento del agua para uso futuro), pero a la larga, las regiones en plena expansión donde se concentra la industria de la alta tecnología, podrán obtener enormes cantidades de agua a precios razonables de una fuente por así decir inagotable. A modo de advertencia, Graham recuerda el fracaso del experimento de privatización del agua en el Valle de Sacramento a principios de los años 90.

Por primera vez, ya nada impedía que las ciudades y los agricultores del sur de California compraran su agua directamente de los granjeros del norte de California, para acarrearla y venderla en el mercado abierto. Los explotadores a gran escala se autosirvieron enormes cantidades de agua que almacenaron en el Banco de Agua en previsión de futuras sequías, aguardando el momento en que el precio subiera lo bastante para justificar su venta. Un pequeño puñado de vendedores se marcharon con enormes beneficios en el bolsillo, mientras que otros agricultores se encontraron con que sus pozos se habían deshidratado por primera vez en su vida. Los resultados fueron desastrosos; la capa acuífera bajó de nivel llegando a hundirse la tierra en algunos lugares.

Graham compara este incidente con la tragedia de Owens Valley a principios de siglo. Dicho valle, que rezumaba agua y fertilidad en tiempos pasados, se fue desangrado hasta secarse por completo cuando los funcionarios de la Administración de las Aguas de Los Angeles imaginaron un plan para desviar las aguas de Owens Valley hacia el sur de California. “El escándalo de Owens Valley demuestra que aunque únicamente unas pocas personas o entidades empresariales tienen la titularidad oficial del derecho de aguas, la comunidad entera depende de ese derecho... El agua en California es sinónima de prosperidad, y cuando el derecho legal a utilizarla puede ser privatizado y traspasado de esta manera, se traspasa al mismo tiempo la prosperidad de la comunidad.”

Empero, y no obstante las advertencias sobre la tormenta que se avecina, el comercio del derecho de aguas sigue floreciendo en California. En 1993, la multimillonaria empresa Bass brothers de Texas compró discretamente 40.000 acres de las tierras agrícolas del Valle Imperial con vistas a vender el agua a la ciudad de San Diego, California. El proyecto, y nunca mejor dicho, se fué al agua cuando se descubrió que la tierra pertenecía al distrito y no a los agricultores. En Enero de 1999, la U.S. Filter Corp. compró un rancho y unos diecisiete millones de metros cúbicos de agua al norte de Reno, Nevada, que pretendía desviar y hacer llegar por un conducto a Reno para su venta. La localidad afectada del condado de Lassen se lamenta de que la van a dejar sin la sangre que fluía por sus venas.

La empresa Samda de Santa Mónica tiene intención de bombear el agua de los pozos en el rancho de 2.000 acres que tiene en Fremont Valley al norte de Mojave para canalizar el agua hacia Los Angeles. La empresa north Stockman Water Co. ha recibido por su parte la luz verde Parker, California para bombear el agua del Valle de San Luis hacia Denver, Colorado

A principios del año 2001, la Administración delas Aguas del Distrito Metropolitano de Los Angeles, firmó un contrato para la compra de hasta 140 billones de litros de agua de la compañía agrícola más importante del estado, Cadiz Inc. Esta iniciativa siembra gran inquietud entre los ecologistas, que temen asistir a la repetición de lo que ocurrió en Owens Valley, ya que el agua será bombeada de una capa acuífera que se encuentra en las profundidades bajo el desierto de Mojave. Tony Coelho, poderoso ex-congresista del Partido Democrático que formó parte del equipo encargado de la campaña presidencial de Al Gore, dice que esta fuente de agua es tan valiosa, que no se le puede poner precio. “Las carreras en el mundo de la política de las aguas tan pronto se construyen como se derrumban, y lo mismo reza en este caso. “. Y añade Keith Brackpool, empresario británico que administra Cadiz, “Si supiéramos sumar, veríamos el precio de nuestra agua subir hasta el cielo.”

Nadie se puede sorprender ante la afirmación del gobernador de California Gray Davis que dice “el agua es más valiosa que el oro.” En un mercado privado, el poder adquisitivo superior de las grandes ciudades como Los Angeles y de las compañías como Intel, pudiera forzar una situación en que el coste del agua será lo bastante alto como para eliminar del mercado a los granjeros, a las

pequeñas localidades y a los pueblos indígenas.

TRATOS A PUERTA CERRADA

Estas compañías están a la espera de cosechar colosales beneficios mientras que los gobiernos en todo el mundo, que han permitido la caída de las infraestructuras municipales, ahora están entregando el mercado del agua al sector privado. Y lo hacen con la participación y visto bueno incondicional de organismos gubernamentales internacionales tales como la ONU y el Consejo Mundial del Agua.

En julio del año 2000, la ONU anunció un pacto comercial mundial con destacadas multinacionales, como son Nike, Shell Oil y la Suez Lyonnaise des Eaux. Muchas ONG se sorprendieron y quedaron profundamente consternadas ante el hecho que la ONU diera su bendición a empresas que se habían forjado una notoria fama internacional, todo ello a cambio de obtener su cooperación en la adopción de un puñado de directrices puramente facultativas. Pero este hecho se inscribe como anillo al dedo en la postura a favor de la privatización que la ONU viene adoptando desde hace unos años.

En una conferencia mantenida en París en marzo de 1998, la Comisión sobre Desarrollo sostenible del Consejo económico y Social de Naciones Unidas propuso que los gobiernos se giraran hacia las “grandes multinacionales” para obtener los capitales y los conocimientos técnicos necesarios y lanzó un llamamiento para la creación de un “mercado abierto” del derecho de aguas así como para que el sector privado desempeñara un papel más extenso en este ámbito. La ONU prometió movilizar fondos privados para las enormes inversiones que hacen falta para asegurar las redes y las fábricas de depuración así como para la tecnología necesaria para asegurar el abastecimiento futuro del agua.

Las Naciones Unidas, junto con el Banco Mundial y la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, es también miembro fundador del Consejo Mundial del Agua, que en sus propias palabras, constituye la olla en la que se cuecen por excelencia las ideas en torno a la política del

agua. Dicho Consejo cuenta entre sus 175 grupos afiliados a las principales asociaciones profesionales, las grandes empresas mundiales de agua, los ministerios encargados de los recursos hídricos, y grandes instituciones financieras internacionales. Uno de sus dos vicepresidentes es René Coulomb de la Suez Lyonnaise des Eaux.

El Consejo mantuvo su primer foro mundial sobre el agua en Marrakesh, Marruecos, en 1997, y el segundo en La Haya en Marzo del 2000, que fue presidido por el vicepresidente del Banco Mundial Ismail Serageldin, y en el que se dieron cita unos 5.700 participantes del mundo entero. Mientras que el foro parecía lanzar un llamamiento para que se aunaran todos los interesados para intentar solucionar la crisis mundial, en lugar de eso fue utilizado como feria de muestras por las multinacionales dedicadas al suministro de agua y de energía e incluso por las grandes compañías de alimentación tales como Nestlé y Unilever para el fomento de la privatización y de la recuperación de los costes integrales como única solución para la escasez del agua en el mundo. La mayoría de los paneles y talleres fueron presididos por el Banco Mundial y por importantes ejecutivos que también conformaron la mayor parte de los panelistas. Durante los cinco días que duró la conferencia, tan solo fue invitado a tomar la palabra un sólo representante sindical del sector público.

Se permitió la asistencia de las ONG, pero el coste prohibitivo de la tarifa de inscripción y del alojamiento permitió asegurar que tan sólo asistiría un reducido grupo de estas organizaciones. En la conferencia participaron los funcionarios de los gobiernos de más de 160 países pero su papel fue limitado al de observadores y se recabó su aprobación del informe final del foro, que se rehusó a denominar el agua como derecho humano, llamándolo en su lugar una “necesidad humana.” A lo largo de este proceso, los gobiernos y el Banco Mundial fueron dejados al margen, mientras las empresas resultaron ser las protagonistas estrella en la escena del agua mundial.

En 1996, se asistió a la creación de un nuevo organismo internacional del agua, que se componía más o menos de los mismos actores. El Global Water Partnership (GWP) se describe a sí mismo como una “red encaminada a la acción” de organismos interesados en cuestiones relativas al agua y cuya misión consiste en encontrar las “herramientas necesarias en la práctica” para resolver los problemas del agua, sobre todo en los países del Tercer Mundo. Entre sus afiliados figuran

numerosas ONG, organizaciones gubernamentales (tales como la Agencia de Desarrollo Internacional del Canadá, cuya ex-presidenta Margaret Catley-Carlson acaba de ser nombrada presidenta del GWP), bancos multilaterales y el sector privado). René Coulomb de la Suez Lyonnaise des Eaux forma parte del consejo de administración, en el que también figuran representantes del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, con sede en Suiza, y del Banco Mundial. Otro representante de la Suez Lyonnaise des Eaux, Ivan Cheret, forma parte del Comité Consultivo Técnico del GWP.

La organización tiene por principio que el agua es una “mercancía económica” que tiene un “valor económico en todos sus usos competitivos”, y sirve para asentar las bases de la prioridad que concede el GWP a la privatización de los servicios de abastecimiento de este recurso. Por ejemplo, en Noviembre de 1997, este grupo consultivo mantuvo una reunión en Vitoria, Brasil, en colaboración con la Asociación Brasileña de Recursos Hídricos y el Banco Interamericano del Desarrollo. Entre las cuestiones que se sometieron a consideración figuraban los “consorcios entre el sector público y privado para la administración de las aguas.” Debido a su presencia en este Comité, la Suez Lyonnaise des Eaux se encuentra en una posición privilegiada para ofertar por estos contratos de “consorcio”, contando con un “sello de aprobación por buena administración casera” por parte de los gobiernos del mundo y de Naciones Unidas.

Resulta evidente que las multinacionales del agua están lanzando una ofensiva en varios frentes para tomar las riendas de los programas internacionales de desarrollo sostenible y moldearlas en su propio interés, y que los dirigentes políticos, el Banco Mundial y Naciones Unidas no ocultan su complicidad. Su camino ha sido facilitado por el lamentable fracaso de los gobiernos de todo el mundo en lo que se refiere a proteger su patrimonio hidrográfico. El sector privado argumenta que ya es hora de darle la oportunidad de administrar este valioso recurso e no faltan los ecologistas que abrazan este punto de vista por haber perdido su fé en los gobiernos.

Los gobiernos están de hecho y por defecto perdiendo su derecho de proteger el patrimonio hidrográfico. La mayoría de los gobiernos tienen muy pocas leyes o reglamentos relativos a los sistemas hidrográficos. La mayoría ni tan siquiera han empezado a ocuparse de las cuestiones de privatización, de comercialización, y de comercio del agua. Sin embargo, mientras dejan sus

recursos hídricos sin protección legislativa, sí están haciendo prueba de dinamismo en lo que se refiere a la negociación y conclusión de acuerdos internacionales sobre comercio e inversión que tienen precedencia sobre las leyes nacionales. Estos tratados incluyen el comercio del agua y en algunos casos otorgan explícitamente el derecho de aguas al sector privado. El ejemplo más flagrante es el del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, firmado por Canadá, EE.UU. y México en 1993.

LA AMENAZA DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO E INVERSIÓN

EL AGUA, EL TLCAN Y EL ALCA

El capítulo III del TLCAN formula las obligaciones relativas al intercambio de mercancías. Se inspira en la definición que de “mercancía” hace el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (AGAAC, más conocido como GATT) que se refiere claramente a las aguas inclusive las naturales, artificiales y las aireadas, y añade una nota explicativa indicando que se incluyen asimismo las aguas naturales de todo tipo (a excepción del agua de mar). El capítulo XII describe con harto detalle el régimen necesario para gobernar los intercambios e inversiones en el sector de los servicios incluyendo los que se refieren al agua. El capítulo XI establece por su parte una amplia gama de derechos del inversionista, inclusive en el ámbito de los bienes y servicios relativos al agua. Así pues, de acuerdo con el TLCAN, el agua es una mercancía comercial, un servicio y una inversión.

El TLCAN contiene tres importantes disposiciones que suponen una amenaza para el agua. La primera se refiere al “trato nacional” mediante el cual ningún país puede “hacer uso de discriminación”, para favorecer su propio sector privado en el uso comercial de sus recursos hídricos. Por ejemplo, si una municipalidad decide privatizar su servicio de abastecimiento, se vería obligado a permitir que las compañías de abastecimiento de otros países signatarios del TLCAN participen a la oferta pública. De la misma manera, una vez que se le otorga una licencia a una compañía nacional para exportar el agua, las empresas de los otros países signatarios del TLCAN deben tener un derecho idéntico al de las compañías nacionales en lo que se refiere a establecer el uso comercial de las aguas del país interesado. Por ejemplo, si una empresa canadiense obtuviera el derecho a exportar el agua de su país, las empresas internacionales estadounidenses tendrían el derecho de autoservirse y tomar toda el agua canadiense que quieran.

La segunda disposición clave se encuentra bajo el artículo 315, que contiene la cláusula de “proporcionalidad”, en virtud de la cual el gobierno de un país del TLCAN no puede reducir o

restringir la exportación de un recurso a otro país signatario una vez que se haya autorizado la exportación. El artículo 309 indica que "ninguna parte podrá adoptar o mantener prohibición o restricción alguna sobre la exportación o vender de cara a la exportación cualquier producto destinado al territorio de otra parte" y esta disposición incluye la prohibición de imponer impuestos sobre la exportación. Esto quiere decir que si comenzara la exportación de agua entre los países del TLCAN, habría que dejar que corrieran los grifos. Las exportaciones de agua estarían garantizadas a un nivel idéntico al adquirido en los 36 meses precedentes; cuanto más agua se exporte, más se precisará para la exportación. Estas exigencias serían inamovibles, incluso si se obtuvieran pruebas de que el acarreo masivo de agua resultara nocivo para el medio ambiente.

La tercera disposición que nos ocupa es la relativa a la solución de conflictos ente el inversionista y el estado (capítulo XI) que permite a cualquier empresa de un país del TLCAN entablar una demanda contra el gobierno de otro país signatario en concepto de indemnización en caso de rehusársele sus derechos de trato nacional o si el país adopta una legislación que "expropie" la compañía de sus beneficios futuros. Unicamente una empresa "con sede en el extranjero" puede entablar una demanda acogiéndose al capítulo XI; las empresas nacionales deben respetar las leyes nacionales y no pueden demandar a su propio gobierno para obtener una indemnización en virtud del TLCAN. Como resultado de ello, hemos podido asistir a un sinfín de procesos en Norteamérica que desafiaban la legislación de los tres países en materia de medio ambiente, salud y seguridad.

El capítulo XI podría aplicarse al agua de dos maneras. Si cualquier país, estado o provincia perteneciente al TLCAN intentara acaparar para su sector nacional la prestación de servicios hidrográficos o la exportación comercial del agua, las empresas de las otras partes tendrían derecho a obtener una indemnización financiera en concepto de "discriminación". De hecho, cualquier intento por parte de un gobierno para poner un alto a las exportaciones del agua automáticamente convierte al agua en una mercancía comerciable. Los derechos que el TLCAN concede a los inversionistas extranjeros, entrarían en vigor en virtud de la mismísima ley que los excluyó, y podrían exigir indemnizaciones financieras en compensación por las oportunidades perdidas.

Y también en virtud del capítulo XI, los cambios en la política de gobierno podrían dar lugar a una demanda. Por ejemplo, si el estado de Alaska cambia de política y decide prohibir la exportación de

agua o modificar su ley de manera que únicamente las empresas de Alaska pudieran exportar su agua y mantener así los empleos en casa, el gobierno de los EE.UU. podría verse expuesto a una importante demanda en virtud de la cláusula sobre la solución de controversias entre el inversionista y el estado. La Global Water Corp. de Columbia Británica espera conseguir muchísimo dinero de su contrato con Alaska. Pero como se trata de una compañía canadiense y no estadounidense, la Global tendría derechos que los EE.UU. no podrían conceder a sus propias empresas en semejante situación.

El primer juicio en el que se invocó el capítulo XI del TLCAN tuvo lugar en el otoño de 1998. La Sun Belt Water Inc. de Santa Bárbara, California, presentó una demanda contra el gobierno canadiense porque perdió un contrato para exportar agua a California cuando la provincia canadiense de Columbia Británica prohibió la exportación de agua a granel en 1991. La Sun Belt alegaba que esta prohibición quebrantaba las disposiciones del TLCAN y buscaba obtener 10.000 millones de dólares USA en concepto de indemnización. “Debido al TLCAN, nos hemos convertido en partes interesadas en la política nacional canadiense relativa al agua”, declaró el PDG de la Sun Belt Jack Lindsay.

Todas estas disposiciones favorables a las empresas — y más — están recogidas en el Area de libre comercio de las Américas (ALCA), que en este momento se está tramitando entre 34 países de las Américas. Aunque se inspira en el modelo del TLCAN, el ALCA va mucho más allá en cuanto a su alcance y poder.

El ALCA, tal y como se le conoce en este momento, introduciría en el hemisferio occidental unas nuevas y concretísimas disposiciones sobre los servicios, que, junto con el capítulo 11, crearían una nueva sede de poder comercial que dispondría de una autoridad arrasadora sobre el más mínimo aspecto de la vida en Canadá y las Américas. La combinación de sendos poderes en un solo acuerdo otorgaría unos derechos totalmente inéditos a las grandes multinacionales del hemisferio, permitiéndoles competir e incluso poner en entredicho cualquier servicio financiado por los fondos públicos, inclusive en lo que se refiere al capítulo de la protección del agua y del medio ambiente.

El ALCA propuesto contiene asimismo nuevas disposiciones sobre la política que rige la

competencia, las adquisiciones del gobierno, el acceso al mercado y la resolución de controversias que, si se añaden a las relativas a los servicios e inversiones, pudieran dejar a los gobiernos de las américas sin potestad para crear o mantener leyes, normas y reglamentos encaminados a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y del medio ambiente que comparten. Por otra parte, los negociadores del ALCA parecen haber decidido imitar la OMC más bien que el TLCAN en las cuestiones relativas al dictado de normas y a la solución de controversias, campos en los que la OMC tiene reglas más rigurosas.

EL AGUA Y LA OMC

El TLCAN no es el único acuerdo sobre libre comercio que pone el agua en peligro. La Organización Mundial del Comercio (OMC), se creó en 1995 a raíz de la conclusión de la ronda de Uruguay del GATT con vistas a consolidar este acuerdo y otros. Los 134 países miembros de la OMC trabajan para eliminar las últimas barreras arancelarias y no arancelarias que quedan en orden a fomentar el movimiento transfronterizo de capitales, bienes y servicios. La OMC no contiene las normas mínimamente necesarias para proteger los derechos laborales, los programas sociales, el medio ambiente o los recursos naturales.

La esencia de la OMC reside en la deregulación; está diseñada para dificultar la labor de los países que desean implantar controles o condiciones sobre los productos exportables, inclusive los recursos naturales. Al mercado se le concede el derecho preeminente de determinar el curso del desarrollo de los recursos y las reglas establecidas por la nación-estado no pueden ser desalentadoras para el comercio o los beneficios. Las rigurosas leyes sobre medio ambiente pueden ser cuestionadas por los países miembros ante la OMC, aduciendo que se trata de barreras no arancelarias al comercio. Por lo tanto, se protegen las normativas nacionales siempre y cuando sus exigencias no superen las que se establecen de media en el mundo; las que sí las superan, se convierten en clarísimos blancos para las demandas. Cada vez que un jurado de arbitraje de la OMC emite un fallo, se requiere la conformidad mundial. Los países están obligados a armonizar sus leyes en función de las normas de la OMC para no verse expuestos a pagar sanciones o indemnizaciones.

La autoridad de la OMC se extiende al agua también, e incorpora la misma definición de mercancía que el TLCAN copió del GATT. Aunque la OMC aún no comprende la cláusula del inversionista-estado, de alguna manera se puede decir que representa un peligro mayor para la protección del agua que el TLCAN. Esto se debe al hecho de que, contrariamente a cualquier otra institución mundial, la OMC dispone tanto del poder legislativo como judicial para poner en entredicho las leyes, políticas y programas de los países miembros que no se conformen a la normativa de la OMC, y tiene el poder de anular estas normas si se demuestra que imponen alguna restricción al comercio.

Hay una disposición de la OMC que amenaza el agua de manera más señalada. El artículo 11 prohíbe específicamente el uso de controles sobre la exportación para cualquier efecto y elimina las restricciones cuantitativas sobre importación y exportación. Esto quiere decir que las cuotas o la prohibición de exportar el agua impuestos por motivos medioambientales podrían ser puestos en entredicho como una forma de proteccionismo. Hechos como el fallo del GATT que obligó a Indonesia a levantar su prohibición sobre la exportación de troncos de madera o como el que el TLCAN dictaminó por una práctica similar en Canadá no auguran nada bueno para el derecho de una nación a proteger sus recursos naturales.

Por otra parte, la OMC obliga a las naciones a renunciar a su capacidad de discriminar contra las importaciones en función de sus prácticas de consumo o de producción. El artículo I sobre la “nación más favorecida” y el artículo III – “Trato Nacional”, exigen que todos los países afiliados a la OMC, traten los productos “idénticos” exactamente de la misma manera a efectos de intercambios comerciales, ya sean o no producidos en condiciones ecológicas. Si se descubriera que el comercio del agua resulta destructivo para los cauces, la OMC podría impedir que los países impongan restricciones sobre su comercio debido a su inquietud por el medio ambiente.

Los partidarios de la OMC aducen que una “excepción” incluida en el GATT servirá para proteger el medio ambiente y los recursos nacionales. En virtud del artículo XX, los países miembros pueden seguir adoptando las leyes “necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal... En relación con la conservación de recursos agotables siempre que dichas medidas

entren en vigor conjuntamente con las debidas restricciones sobre la producción o el consumo nacionales.” Sin embargo, existe un elemento que viene a rematar el artículo XX, mediante el cual el artículo en cuestión tan solo se puede aplicar de manera “no discriminatoria” y no puede constituir una barrera disfrazada contra el comercio. En los conflictos presentados ante la OMC para poner a prueba estas “medidas de protección”, resulta que este remate lleva la batuta en lo que se refiere al artículo XX. Dicho de otro modo, la OMC siempre se las ha arreglado para hacer que los derechos comerciales prevalezcan sobre los de la protección del medio ambiente

Asímismo, las medidas de protección deben de ser interpretadas de manera que resulten “lo menos restrictivas para el comercio”. Además, la OMC no reconoce la autoridad de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y amenaza con contrarrestar acuerdos tales como la Convención sobre el Comercio Internacional de las especies de fauna y de flora en peligro de extinción (CITES). Como señala el periódico estadounidense *Public Citizen*, "La jurisprudencia emergente...muestra que la OMC sigue poniendo a la abogacía en contra de las leyes medioambientales." Si se toman como indicio los fallos del jurado hasta la fecha, está claro que el agua se halla en gran peligro bajo la OMC, pese a la supuesta “excepción”.

Un nuevo acuerdo de la OMC, el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS) amenaza gravemente a su vez la soberanía y la conservación del agua. El AGCS se estableció en 1994, al terminar la ronda de Uruguay del GATT, y fue uno de los acuerdos comerciales que se decidieron incluir en la OMC cuando se formó esta organización en 1995. Las negociaciones debían empezar cinco años más tarde en vista de “aumentar el grado de liberalización progresivamente.” Estas discusiones empezaron tal como previsto, en febrero del año 2000, y deberían culminar en un acuerdo general de aquí a diciembre 2002.

El AGCS se considera un "acuerdo marco multilateral", lo cuál quiere decir que su amplio cometido se definió en el momento de su creación, y que se le irán añadiendo después nuevos sectores y nuevas normas mediante negociaciones permanentes. En resumidas cuentas, el AGCS tiene por mandato restringir las medidas gubernamentales relativas a los servicios, a través de un conjunto de restricciones legales obligatorias que están apoyadas por las sanciones comerciales que la OMC tiene el poder de aplicar. Su propósito esencial es el de restringir a todos los niveles de

gobierno en la prestación de servicios y facilitar el acceso de las multinacionales a los contratos del gobierno en toda suerte de campos, entre los que figuran los servicios relativos al agua y al medio ambiente.

El AGCS cubre cientos de tipos de servicios relacionados con el agua — alcantarillado, abastecimiento de agua potable, saneamiento de los desechos líquidos, protección de la naturaleza y del paisaje, construcción de canalizaciones y cañerías, vías marítimas, petroleros, evaluación del agua subterránea, irrigación, presas, agua embotellada, y servicios de transporte del agua, entre otros. Lo que no hay que olvidar es que el propósito de las disciplinas del AGCS no se refiere a los servicios en sí, sino a las medidas, iniciativas y reglas gubernamentales relativas a dichos servicios que limitan el derecho del sector privado a brindar sus servicios a las industrias. Hasta la fecha, ningún otro acuerdo ha intentado tan honda ingerencia en la jurisdicción política de los gobiernos (aunque el acuerdo del ALCA sobre servicios se inspire del modelo del AGCS).

En lo esencial, y de la manera en que se propone redactar el acuerdo de momento, los gobiernos se verían en la obligación de tener que demostrar que toda medida o regla relativa al agua (y a otros servicios, tales como la sanidad y la educación) es “necesaria”, que se inspira de “criterios transparentes y objetivos”, que cumple con las “normas internacionales pertinentes” y que es la menos restrictiva para el comercio de entre todas las que se hubiera podido adoptar. Por ejemplo, para defender las normas relativas al agua potable ante un jurado de la OMC, un gobierno tendría que probar que ha analizado hasta la última posibilidad concebible de mejorar la calidad del agua, que su propuesta fue sometida a una evaluación de su impacto sobre el comercio internacional de los servicios de aguas, y que terminó optando por el mecanismo que resultaba menos restrictivo para los proveedores privados extranjeros.

Por otra parte, el AGCS aún no ha adoptado la débil excepción del artículo XX del GATT relativo a la conservación, lo cual equivale a un clarísimo y deliberado intento de subordinar las metas de conservación a las de la liberalización del comercio. Como lo hace constar el especialista en comercio canadiense Steven Shrybman en su opinión jurídica de marzo 2001 sobre el AGCS: "Están en peligro la propiedad pública de los recursos hídricos, los servicios de agua del sector público, y la autoridad de los gobiernos en lo que se refiere a regular las actividades empresariales

por motivos de protección del medio ambiente, de conservación o de salud pública."

EL AGUA Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE INVERSIÓN

Además de los acuerdos anteriores, los países del mundo entero están firmando tratados bilaterales de inversión que, en su mayoría, dejan sus sectores de los recursos naturales abiertos a las inversiones incondicionales por parte de las empresas del otro país signatario. En este momento existen 1.720 acuerdos bilaterales y su número aumenta cada año. La mayoría de estos tratados bilaterales contienen disposiciones parecidas a las del capítulo XI del TLCAN, permitiendo así a los países signatarios demandar a los gobiernos y obtener indemnizaciones en concepto de "expropiación". Este es el camino escogido por Bechtel en su proceso contra el gobierno boliviano.

Los tratados bilaterales sobre inversiones toman por modelo el Acuerdo Multilateral sobre inversiones (AMI), tratado propuesto por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que fue rechazado en el otoño de 1998 debido a la oposición internacional. Redactado por la Cámara Internacional de Comercio, el AMI contenía los mismos derechos inversionista-estado que el TLCAN, pero los aplicaba a una serie más extensa de sectores y empresas. Un "inversionista" de cualquier país miembro podía reclamar el acceso a los recursos naturales de cualquier otro país indiscriminadamente y tendría el derecho de presentar una demanda en concepto de indemnización si le era negado este derecho. El AMI definía claramente las reglas de privatización de los bienes públicos, inclusive de los recursos naturales.

Estos acuerdos internacionales sobre comercio e inversiones están teniendo cada vez más poder y alcance. Sin embargo son muy pocos los ciudadanos del mundo que saben de su contenido o tan siquiera de su existencia. Ningún plan para la protección del agua se puede permitir encogerse de hombros e ignorarlos; constituyen un peligro tan presente como inequívoco para la administración de las aguas y deben de ser profundamente reformados o sencillamente abolidos.

LA NECESIDAD DE ADOPTAR PRINCIPIOS COMUNES

“Las aguas forman familias que reparten su intimidad anidando en distintas capas. En la mayor escala posible, la red hidrológica es semejante al de toda la humanidad — Serbios, Rusos, Indios Koyukon, Amish, los miles de millones de habitantes de la República Popular China — y tiene muchísimos problemas, pero es difícil saber en que manera se les puede ayudar. A medida que se va avanzando río arriba hacia el hogar, la relación se hace cada vez más íntima. El gran río es como el país de cada uno y anda algo desbocado. El lago es su primo. El arroyo su hermano. El estanque su hijo. Y, para bien o para mal, en la salud y en la enfermedad, usted está casado con su fregadero.”

— Michael Parfit, *National Geographic*

Ante este nuevo milenio, el mundo se dispone a tomar decisiones cruciales y posiblemente irrevocables sobre el agua. Aparte de aquellos que deliberadamente están buscando beneficiarse de la crisis mundial del agua y de aquellos que siguen contaminando los sistemas fluviales aún sabiendo a ciencia cierta los daños que han causado, el daño que se le ha hecho al agua hasta la fecha ha sido sobre todo sin intención y más bien de tipo reactivo — un cóctel de negligencia, de ambición y de ignorancia benignas, exigencias hartas excesivas sobre un recurso limitado, de contaminación descuidada y de desvíos sin tón ni són. La raza humana ha dado por sentado que el agua le pertenecía y en general no ha sabido juzgar la capacidad que tienen los sistemas fluviales de la tierra para regenerarse y recobrase de nuestros actos inconscientes. Aunque ahora nos toque responder ante el enorme daño que hemos ido causando, quizás sea justo recordar que nadie trazó un plan deliberado para crear la escasez mundial del agua o acabar con el agua dulce del planeta.

No obstante, la ausencia de malicia ya no sirve de excusa. Sabemos demasiado. Ya se han establecido fuerzas que quisieran que el agua se convierta en una mercancía privada que pueda ser vendida e intercambiada en el mercado abierto, controlada por grandes multinacionales y garantizada para el mejor servicio de los inversionistas y de los sectores privados a través de los acuerdos mundiales sobre comercio e inversiones. Este es el futuro del agua si nos quedamos de brazos cruzados.

LA ÉTICA DEL REPARTO DEL AGUA

Para poder empezar a desarrollar una ética del agua exhaustiva y sostenible, es necesario empezar por reconocer que existe una profunda injusticia humana en lo que se refiere al acceso del agua potable en todo el mundo. Los habitantes que carecen de este recurso viven casi exclusivamente en el tercer mundo; los que tienen agua de sobra viven en el primero, donde los gobiernos y las empresas se han enriquecido por la colonización de las mismísimas regiones que ahora padecen escasez. Reconocemos en esta situación un trágico dilema. Se podría decir que los países industrializados tienen la obligación moral de compartir el agua con las regiones en las que escasea, aún cuando esto pudiera agravar el estado de ecosistemas que ya van camino de deteriorarse.

Los que opinan que el agua es una mercancía afirman que el agua que desemboca en el mar o que se encuentra en lo que el PDG de una empresa de forestería denomina a la “naturaleza decadente”, no es útil para la gente o para la economía y que constituye así pues una mercancía desperdiciada. Los ecologistas advierten sin embargo que este es un análisis simplista. Entre otras cosas, el agua de los lagos no se puede exportar o desviar a menos que decidamos desecarlos. Las únicas fuentes de agua potable realmente disponibles son el agua que fluye en los ríos hacia el mar o que se extrae de las capas acuíferas. Por ejemplo, aunque Canadá posee casi una cuarta parte del agua dulce del mundo, gran parte de ella se encuentra en los lagos o sistemas fluviales que fluyen hacia el norte. El hecho de acarrear cantidades voluminosas de este agua causaría enormes deterioros en los ecosistemas del país.

Los científicos advierten que la extracción de cantidades masivas de agua de los cauces podría destruir los ecosistemas. La bajada de los niveles de agua puede crear agujeros y secar los pozos. El movimiento del agua a gran escala acarrearía tremendos costes energéticos; una versión del proyecto del Canal GRAND exigía la construcción de una serie de plantas nucleares a lo largo de la ruta para proveer la energía necesaria para el traslado de tan descomunales volúmenes de agua. Existen proyectos hidroeléctricos y de desvíos de las aguas que están causando fenómenos locales relacionados con el cambio climático, la reducción de la biodiversidad, el envenenamiento por

mercurio, la deforestación, y la destrucción de los pantanos y del habitat de los peces. No nos queda más que imaginar el deterioro que un mega proyecto como el Canal GRAND podría causar. Los estudios científicos muestran que la extracción de agua a gran escala afecta no sólo los sistemas vecinos sino también los ecosistemas que se encuentran a lo lejos. “Este trabajo demuestra más allá de toda duda que el agua no se desperdicia por el hecho de desembocar en el mar. Sugiere que los efectos acumulados de la extracción de agua de los lagos, ríos y arroyos para su exportación en petroleros podrían tener repercusiones de gran escala en el entorno del litoral y del mar,” afirma el especialista hidrográfico canadiense Jamie Linton.

Richard Bocking compara el hecho de desviar los ríos a una apuesta de tipo faustiano. “Para obtener energía hidroeléctrica o para la irrigación, estamos dispuestos a intercambiar gran parte de la vida de un río, de sus valles y sistemas biológicos, e incluso el modo de vida de la gente que se encuentren en el camino. A medida que se va concretando el coste de cincuenta años de construcción de presas, ya no podemos albergarnos en la excusa de que desconocemos las consecuencias de tratar nuestros ríos y lagos como vulgares sistemas de fontanería.”

¿Qué decir sin embargo del argumento humanitario que aduce que en un mundo en que el agua se reparte de manera injusta, las regiones más acaudaladas tienen la obligación de compartir su abastecimiento con los demás? Quizás convenga hacer la distinción entre un planteamiento a corto y a largo plazo. La importación del agua no es una solución recomendable a largo plazo ni para los ecosistemas ni para las personas de las regiones donde el agua escasea. El agua es tan necesaria a la vida que nadie debería de depender de los abastecimientos extranjeros que pudieran interrumpirse por motivos políticos o ecológicos.

También conviene distinguir entre *comercio del agua* y *reparto del agua*. Cuando se trata de un intercambio comercial, los que realmente necesitan el agua serán ineludiblemente los últimos en recibirla. Únicamente podrán disponer del agua acarreada sobre largas distancias por los petroleros los ricos, y sobre todo las grandes empresas. Importar el agua únicamente para los que pueden permitírselo reduciría el carácter acuciante de los esfuerzos y de las presiones políticas para hallar soluciones auténticas, sostenibles y justas para resolver los problemas de escasez que conocen algunos países.

George Wurmitzer, Alcalde de Simitz, pequeña localidad de los Alpes austriacos, describe la diferencia entre el reparto y el comercio del agua al manifestar su inquietud en relación con las exportaciones de agua a gran escala a partir de su localidad: “Yo entiendo que es un deber sagrado ayudar al sediento. Pero me parece un pecado trasladar el agua únicamente para que las personas puedan tirar de la cadena de sus inodoros y lavar sus automóviles en regiones desérticas...No tiene sentido y es una locura ecológica y económica.”

Como dice Linton , “ puede que el argumento más poderoso contra la exportación [comercial] del agua reside en que únicamente serviría para perpetuar el problema principal que inicialmente causó la crisis del agua — la creencia que para satisfacer las exigencias cada vez mayores de la gente por el agua bastaría con aumentar el nivel de abastecimiento. Este modo de pensar es el que ha llevado al drenaje de los lagos, al agotamiento de las capas acuíferas y a la destrucción de los ecosistemas acuáticos en todo el mundo

Si consiguiéramos no obstante mantener el control público sobre el agua, podría ser posible compartir el abastecimiento a corto plazo entre países en tiempos de crisis. En tales casos, el hecho de compartir el agua debería de ir surtido con unos plazos y condiciones rigurosos de suerte que la región beneficiaria deje de depender de estos suministros lo antes posible. De esta manera, el agua serviría para fomentar la recuperación de los sistemas fluviales. Empero, este tipo de resolución es inconcebible mientras que la privatización del agua del mundo siga sin cuestionarse; las empresas no permitirían el establecimiento de un sistema de traslado de agua con fines no lucrativos.

LA ÉTICA DE LA TARIFICACIÓN DEL AGUA

De la misma manera, el llamamiento para otorgarle un valor económico real al agua — que cada vez más lanzan los ecologistas para señalar como corresponde que en muchos países acaudalados en agua el suministro de este recurso se da por sentado y se desperdicia de mala manera — debe de entenderse en un contexto político. El planteamiento consiste en que, si se le impone un valor económico al agua, la gente estaría más dispuesta a conservarla. Pero en el clima que reina

actualmente, subsisten graves inquietudes que han de plantearse a propósito de la tarificación del agua.

En primer lugar, la tarificación del agua acentúa la falta de igualdad que existe en el mundo en relación con el acceso al agua. Como sabemos, los países que padecen duras penurias de agua son aquellos en que residen las personas más desfavorecidas de la tierra. El hecho de cobrarles por un abastecimiento escaso de entrada es una receta segura para agudizar las diferencias en el reparto.

La cuestión de la tarificación del agua ahondará por lo tanto las diferencias entre Norte y Sur. El nerviosismo en torno a la escasez mundial del agua conlleva un sobreentendido. Casi todos los artículos sobre el tema empiezan recordando la explosión demográfica y los lugares donde ocurre. Lo que se sobreentiende es que “estas personas” son las culpables de la crisis del agua que se expande sin tregua. Pero apenas doce por ciento de la población mundial consume el 85 por ciento del agua, y da la casualidad que el doce por ciento en cuestión no reside en el Tercer Mundo.

La privatización de este escaso recurso generará un mundo que funcionará a dos velocidades — los que pueden permitirse el agua y los que no. Obligará a millones de personas a escoger entre necesidades tales como el agua y los cuidados médicos. En Inglaterra, las tarifas elevadas obligaron a las personas a escoger entre enjuagar sus hortalizas, tirar de las cadenas de sus inodoros o bañarse.

En segundo lugar, y en virtud de los acuerdos comerciales existentes, el agua tarificada se convierte en una mercancía privada. Únicamente si el agua se mantiene como servicio público, como un producto suministrado y protegido por los gobiernos, podrá escapar de la onerosa aplicación de las medidas impuestas por estos acuerdos de libre comercio. Los acuerdos son tajantes: si el agua se privatiza y sale al mercado abierto, acabará en manos de los que se lo pueden permitir y no en las de los necesitados. Según lo dictaminan las reglas y condiciones de estos acuerdos, una vez que se abra el grifo, ya no se podrá volver a cerrar.

El Banco Mundial afirma que subvencionará el suministro de agua a los pobres. Cualquiera que esté al tanto de los problemas del estado de bienestar, particularmente en el tercer mundo, sabe que

este tipo de caridad resulta punitivo en el mejor de los casos, e inexistente en la mayoría de ellos. El agua es un derecho fundamental humano que se encuentra garantizado en el Convenio Internacional de la ONU sobre Derechos Humanos. La distribución gratuita del agua no es lo que los artífices de esa grandiosa declaración tenían en mente.

En tercer lugar, la tarificación del agua, tal y como se plantea por ahora, no tendrá demasiado impacto. Se admite por regla general que el consumo de agua en los centros urbanos se divide de la manera siguiente: 70 por ciento para el sector industrial; 20 por ciento para el sector institucional; y de 6 a 10 por ciento para uso doméstico. Sin embargo la mayoría de los debates en torno a la tarificación del agua giran alrededor del consumo individual. Como ya es notorio, los grandes usuarios empresariales logran escabullirse del coste del agua.

Por último, en un sistema de oferta pública por el agua, ¿quién será el que la compre en beneficio del medio ambiente y de las generaciones futuras? A lo largo de este debate sobre la privatización y la tarificación, apenas se menciona el mundo natural y las demás especies. Esto se debe a que el medio ambiente no forma parte de la ecuación comercial. Si perdemos el control público de nuestros sistemas hidrográficos, ya no quedará nadie habilitado a reclamar esta fuente de vida para la tierra.

Pero la necesidad de dejar de desperdiciar el agua es acuciante. El diálogo sobre la tarificación del agua es crucial; sin embargo, debe desarrollarse en un marco más extenso. En honor a la eficacia y a la justicia, cualquier consideración seria relativa a la tarificación del agua debe tener en cuenta tres factores: la pobreza de algunos países; el agua como derecho humano y el agua en la naturaleza.

Para ocuparse del primer factor, la pobreza de algunos países, los gobiernos podrían tomar varias medidas desde ya mismo. Entre ellas figuran la cancelación de la deuda del Tercer Mundo, el aumento de los presupuestos dedicados a la ayuda extranjera hasta alcanzar sus niveles anteriores (siete por ciento del PIB), y la implantación de un impuesto de tipo Tobin (nombre de un ministro canadiense) sobre especulación financiera que permitiría pagar por infraestructuras hidrográficas y servicios de abastecimiento universales.

Para tratar de la cuestión del agua como derecho humano, los países deben adoptar constituciones como la de Africa del Sur, que garantiza el agua ante todo para la gente, en segundo lugar para la naturaleza, y tercero para la economía. A cada habitante de Africa del Sur se le garantiza el agua suficiente para cubrir sus necesidades fundamentales; y la tarificación no entró en juego hasta que estas necesidades estén cubiertas.

Para asegurar que la supervivencia del ecosistema sea un elemento clave de cualquier nuevo sistema que pudiera incluir la tarificación, las recetas obtenidas deben de servir para proteger el medio ambiente, sanear los pantanos, hacer respetar las normas relativas al agua potable y proceder a la reparación de las infraestructuras defectuosas que en este momento están causando grandes desperdicios del recurso.

Por otra parte, el acento debe de ponerse en los que más abusan del agua — es decir las grandes industrias y las actividades agropecuarias. Los gobiernos deben recordar la primacía de la ley a aquellas empresas que se dedican a contaminar y a malgastar tan preciado recurso. Pueden asimismo recurrir a la implantación de un regimen impositivo más justo que capte algunos de los miles de millones imposables que las grandes empresas consiguen eludir. Estos ingresos podrían ser muy útiles para sanear los sistemas hidrográficos agonizantes del planeta. El acento debe manifiestamente ir colocado en los que más utilizan el agua comunitaria para luego cosechar los beneficios del uso de este bien común, de este mandato público, máxime en una era en que proliferan las fusiones y las grandes multinacionales. El sector empresarial no tiene derecho a privar a nadie de sus derechos humanos inalienables; si tal es el precio del beneficio, el precio resulta demasiado elevado.

Sin embargo, ninguna de estas condiciones se pueden dar si el agua no es controlada en beneficio público. Si se permite que el agua sea comercializada y controlada por las empresas, el principio lucrativo seguirá imperando. En tal caso, la tarificación del agua se convertiría en una herramienta de mercado, en lugar de un medio que sirva de incentivo para la conservación y para asegurar que el agua siga siendo un derecho fundamental para todos los habitantes de la tierra.

LA PROTECCIÓN DEL AGUA: DIEZ PRINCIPIOS

Para que todos los niveles del gobierno y las localidades del mundo entero puedan tomar el tipo de medidas que se imponen, es urgente que lleguemos a un acuerdo sobre los principios y valores que deben guiar nuestros actos. A continuación proponemos unos principios para entablar el diálogo:

1) El agua pertenece a la tierra y a todas las especies.

El agua, al igual que el aire, es necesaria para la vida. Sin agua, los humanos y otros seres morirían y sería el fin de los sistemas hidrográficos de la tierra. La sociedad moderna ha perdido el respeto por el lugar sagrado que le corresponde al agua en el ciclo de vida, así como sus afinidades espirituales con el preciado líquido. Esta falta de respeto por el agua ha permitido que abusáramos de ella. Para poder enderezar el mal que hemos causado, tenemos que empezar por redefinir nuestra relación con el agua y reconocer su lugar esencial y sagrado en el seno de la naturaleza.

Como el agua pertenece a la tierra y a todas las especies, los dirigentes políticos deben representar los derechos y las necesidades de otras especies en todas sus decisiones. Las generaciones venideras también son partes interesadas que requieren representación en las decisiones que se tomen sobre el agua. La naturaleza, y no el hombre, está en el centro del universo. A pesar de toda nuestra brillantez y nuestros grandes logros, somos una especie animal que necesita el agua por las mismas razones que las demás. Contrariamente a otras especies, sin embargo, únicamente los humanos tenemos el poder de destruir ecosistemas sobre los cuales dependen todas y por lo tanto, los humanos tenemos la urgente necesidad de redefinir nuestra relación con el mundo natural.

Jamás se debe tomar decisión alguna sobre el consumo de agua sin antes tomar enteramente en cuenta las repercusiones que puede tener sobre el ecosistema.

2) El agua debe dejarse donde está en la medida de lo posible.

La naturaleza ha puesto el agua en el lugar que le pertenece. Jugar con la naturaleza acarreado grandes cantidades de agua de los cauces puede causar la destrucción de los ecosistemas. La extracción y desvío de las aguas a gran escala, afecta no solo los sistemas circundantes, sino también los que se encuentran a lo lejos. El agua que desemboca en el mar no se “desperdicia”. Los efectos acumulados de la extracción del agua de los lagos, ríos y arroyos tiene impactos desastrosos a gran escala para el entorno del litoral y del mar así como para los pueblos indígenas de la región así como para otras personas cuyo modo de vida depende de los recursos naturales del lugar.

Aunque pueda haber una obligación de compartir el agua en tiempos de crisis, tal como se hace para los alimentos, no es una solución recomendable a largo plazo que los ecosistemas o los habitantes de ninguna región del mundo empiecen a depender de los abastecimientos extranjeros para esta fuente de vida. El hecho de importar una necesidad tan fundamental podría crear una relación de dependencia que no es acertada para ninguna de las partes. Al aceptar este principio, aprendemos a conocer la naturaleza de los límites del agua y a convivir con ellos, y empezamos a girar la vista hacia nuestras propias regiones, localidades y hacia nuestros propios hogares buscando medios para satisfacer nuestras necesidades mientras respetamos el lugar del agua en la naturaleza.

3) El agua debe ser conservada para todos los tiempos.

A cada generación le toca asegurarse que sus actividades no redunden en un empobrecimiento de la abundancia y de la calidad del agua. La única manera de resolver el problema de la escasez mundial estriba en un cambio radical de nuestras costumbres, especialmente en lo que se refiere a la conservación del agua. Los habitantes de los países acaudalados deben de cambiar sus hábitos de consumo, sobre todo en las regiones fértiles donde prolifera la biodiversidad. De no actuar de manera más ahorrativa, estos países tampoco tendrán derecho a mostrarse reticentes a la hora de compartir el agua — aún por motivos ecológicos y éticos — so pena de exponerse a críticas enteramente justificadas.

La clave para mantener fuentes sostenibles de agua subterránea reside en asegurar que el ritmo de extracción no supere el del tiempo que necesita para realimentarse. Parte del agua destinada a las

ciudades y a las actividades agropecuarias tendrá que ser restituida a la naturaleza. Hay que preservar extensos tramos de los sistemas fluviales; y los gobiernos deben de llegar a un consenso y fijarse una meta mundial. Los grandes proyectos de construcción de presas deben de aplazarse hasta nueva orden, o cancelarse del todo, y algunos de ríos que han sido desviados, deben de volver a encauzarse de manera que su fluir esté en mayor consonancia con la naturaleza y las estaciones.

Las mejoras infraestructurales deben de convertirse en una prioridad para los gobernantes de todo el mundo de manera a poner fin a las tremendas pérdidas de agua debidas a la antigüedad y al estado de deterioro de las canalizaciones. Los gobiernos deben dejar de fomentar con subsidios las prácticas derrochadoras de las empresas. De esta manera, lograrán hacer pasar el mensaje que el agua no abunda y que por lo tanto no se puede malgastar.

4) El agua contaminada debe ser recuperada.

La raza humana ha contribuido colectivamente a la contaminación del agua en el mundo y por lo tanto, debe responsabilizarse colectivamente de la labor de saneamiento. La escasez de agua y la contaminación vienen causadas por valores económicos que propician un consumo abusivo y muy poco rentable de este recurso. Estos valores están equivocados. Una resolución para el saneamiento del agua contaminada es un acto de autopreservación. Nuestra supervivencia así como la de todas las especies dependen de la recuperación de los ecosistemas que funcionan al són de la naturaleza.

Los gobiernos de todos los niveles y las localidades de cada país deben de proceder al saneamiento de los sistemas fluviales contaminados y poner fin, en la medida de lo posible, a la destrucción de los pantanos y de los entornos acuáticos. Hace falta adoptar leyes e instrumentos de ejecución rigurosos para tratar de resolver la contaminación que proviene de la agricultura, de las alcantarillas municipales y de los contaminantes industriales, que son las principales causas del deterioro del agua. Los gobiernos deben de volver a tomar el control sobre las grandes empresas de minería y forestería cuyas prácticas incontroladas siguen causando incalculables daños a los sistemas hidrográficos.

La crisis del agua no puede ser percibida al margen de otras importantísimas cuestiones ecológicas

como son el arrasado de los bosques y los cambios climáticos imputables a la actividad humana. La destrucción de lagos y ríos debida al arrasado de los bosques daña muy seriamente el habitat de los peces. Los cambios climáticos acabarán causando condiciones extremas. Las inundaciones subirán de nivel, las tormentas serán más fuertes, las sequías se harán más largas. Y cada vez irá en aumento la demanda de agua dulce. El saneamiento del agua contaminada exigirá un compromiso internacional capaz de reducir radicalmente el impacto del ser humano sobre el clima.

5) La mejor forma de proteger el agua es dejarla en su entorno natural.

El futuro para un mundo que pueda garantizar el agua reposa en la necesidad de residir en las “bioregiones”, es decir en el entorno natural de las cuencas de los ríos. El bioregionalismo es la práctica de vivir adaptándose a los límites de un ecosistema natural. Las características de las aguas superficiales y subterráneas de cada cuenca constituyen un conjunto de parámetros fundamentales que gobiernan casi por entero la vida de determinada región; otros elementos, tales como la flora y la fauna, están ligados a las condiciones hidrológicas de la región. Por tanto, si vivir dentro de los límites ecológicos de una región es un factor clave para el desarrollo de una sociedad sostenible, las cuencas son un excelente punto de partida para establecer prácticas bioregionales.

Una ventaja de pensar que las líneas divisorias empiezan y acaban donde se encuentran las cuencas, es que el agua no conoce fronteras entre países o estados. La gestión de las cuencas permite un planteamiento más interdisciplinario de la protección del agua, y es una manera de romper las jaulas en las que se han encerrado los gobiernos tanto a escala internacional, nacional local y tribal, que llevan tantísimo tiempo erosionando la política del agua en el mundo entero. La delimitación de las cuencas, y no las líneas divisorias políticas o burocráticas llevará a una forma de protección y de toma de decisiones más cooperativa.

6) El agua es un mandato público por el que todos los niveles de gobierno deben velar.

Ya que el agua, al igual que el aire, pertenece a la tierra y a todas las especies, nadie tiene el derecho de apropiarse o de sacar provecho de ella a costa de otros. El agua constituye así pues un mandato público que debe de ser protegido por todos los niveles de gobierno y todas las

localidades del mundo.

Por lo tanto, el agua no debe ser privatizada, reificada, comercializada o exportada a granel para fines comerciales. Los gobiernos de todo el mundo deben de tomar medidas sin más tardar para declarar que las aguas de sus territorios son un bien público y deben poner en pie sólidas estructuras de reglamentación para protegerlas. El agua debe ser exonerada inmediatamente de todo acuerdo internacional, bilateral y de libre comercio e inversiones, existente o futuro. Los gobiernos deben de prohibir los proyectos de comercio del agua a gran escala.

Aún reconociendo que los gobiernos han fracasado miserablemente en lo que se refiere a proteger su patrimonio acuático, hay que recordar que esta situación tan solo puede ser enderezada a través de las instituciones democráticas. Si el agua se convierte en una mercancía que ha de ser claramente controlada por el sector privado, las decisiones a su respecto obedecerán exclusivamente a sus fines lucrativos.

Cada nivel de gobierno debe proteger el agua que ha sido confiado a su cuidado: las municipalidades deben de dejar de hacer redadas sobre los sistemas fluviales de las localidades rurales. La cooperación dentro de una misma cuenca redundará en la protección de sistemas fluviales y lacustres de mayor envergadura. La legislación nacional e internacional prevalecerá de cara a las grandes multinacionales y pondrá fin a las prácticas empresariales abusivas. Los gobiernos determinarán los adecuados niveles impositivos sobre el sector privado y estos impuestos servirán para la reparación de las infraestructuras. Todos los niveles de gobierno aunaran sus esfuerzos para fijarse una meta encaminada a preservar la naturaleza acuática del mundo.

7) Disponer de agua potable suficiente es un derecho fundamental.

Todas las personas del mundo tienen derecho a disponer de agua potable y de sistemas sanitarios en condiciones, donde quiera que vivan. La mejor manera de asegurar este derecho es manteniendo los servicios de abastecimiento y alcantarillado en el sector público, regulando la protección de las aguas y fomentando el consumo sensato del agua. Las personas que viven en las regiones donde escasea el agua únicamente podrán disponer del agua potable que necesitan mediante el fomento de

la conservación y protección de sus recursos locales.

Los pueblos indígenas tienen derechos inherentes especiales en relación con sus territorios tradicionales, incluyendo el agua. Estos derechos ancestrales les pertenecen por el uso de posesión de la tierra y del agua de sus territorios y en virtud de sus antiguos sistemas sociales y jurídicos. El derecho inalienable de la autodeterminación de los pueblos indígenas debe ser reconocido y codificado por todos los gobiernos; la soberanía sobre el agua es un factor crucial para proteger estos derechos.

Los gobiernos de todo el mundo deben de hacer suya la frase “la caridad bien entendida empieza por uno mismo”, e implantar una política preferente para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos a disponer de agua. La legislación que exige que todos los países, localidades y bioregiones protejan los recursos hídricos locales, y que busquen nuevas fuentes locales antes de tornarse hacia otras regiones conseguirá muchísimo en lo que se refiere a poner fin a la práctica antiecológica de trasladar el agua de una cuenca a otra. Este principio quiere decir que las gentes y los granjeros del lugar tienen la preferencia. Las actividades agropecuarias y la industria, sobre todo las grandes multinacionales, deben de adaptarse a esta política preferente y conformarse con el segundo lugar so pena de verse clausuradas.

Esto no quiere decir que el agua ha de ser “gratuita” o que no hay más que autoservirse. Sin embargo, una política de tarificación que respete este principio ayudaría a conservar el agua y a preservar los derechos de todos los que tienen acceso a ella. La tarificación del agua y los “impuestos verdes” (que aumentan las recetas del gobierno a la vez que enfrían el consumo de recursos y su contaminación) deberían de ser más fuertes para las actividades agropecuarias y la industria que para los ciudadanos, y los ingresos correspondientes deben servir para proveer agua para todos.

8) Los mejores defensores del agua son las localidades y sus ciudadanos.

Las administraciones locales, que no las empresas privadas, las tecnologías prohibitivas o inclusive el gobierno, son la mejor garantía de protección del agua. Los únicos que pueden hacerse una idea

del efecto acumulado de la privatización, la contaminación, la extracción y el desvío de las aguas de una localidad, son sus ciudadanos. Son los únicos que conocen los efectos de las pérdidas de empleo o de las granjas debido a que las grandes empresas toman las riendas o desvían el agua para usarla en lugares lejanos. Hay que comprender que los ciudadanos y las localidades en las que residen, son los “guardianes” en primera línea de los ríos, lagos y de los sistemas de los cuales dependen su vida y sus quehaceres.

Para que las soluciones a la escasez sean asequibles, sostenibles y justas, deben de inspirarse y fundamentarse en las localidades. Los proyectos de saneamiento que funcionan a menudo se deben a organizaciones ecológicas y cuentan con la intervención de todos los niveles de gobierno, y hasta a veces con donativos privados. Pero estos proyectos no serán viables o sostenibles si no van guiados por el sentido común y la experiencia de las comunidades locales.

En las regiones donde escasea el agua, se están volviendo a considerar con cierta urgencia el recurso a las tecnologías indígenas ancestrales, tales como el compartir el agua y sistemas de captación de la lluvia, que habían sido abandonados para abrazar las nuevas tecnologías. En algunas regiones, las gentes del lugar se han reponsabilizado enteramente de las canalizaciones y han establecido fondos a los que deben de contribuir los consumidores de agua. Estos fondos se utilizan para abastecer a toda la comunidad.

9) El público debe participar a partes iguales con el gobierno para proteger el agua.

Un principio fundamental para salvaguardar el agua de cara al futuro es que el público debe de ser consultado e invitado a participar a partes iguales con los gobiernos en la formulación de las políticas relativas al agua. Hace demasiado tiempo que los gobiernos y las organizaciones económicas internacionales como son el Banco Mundial, la OCDE y los burócratas del libre comercio se dejan guiar por intereses comerciales. Inclusive en las rarísimas ocasiones en que se las invita a tomar asiento en la mesa de negociaciones, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los grupos ecológicos no suelen tener ni voz ni voto. Las empresas que dedican importantes fondos al apoyo de campañas políticas suelen obtener contratos ultrapreferentes para el dominio de los recursos hídricos. A veces incluso ocurre que los grupos empresariales que hacen

presión en los pasillos terminan redactando el enunciado de los acuerdos y tratados que adoptan los gobiernos. Esta práctica ha dejado en entredicho la legitimidad de los gobiernos en todas partes.

Se deben de crear procesos mediante los cuales los ciudadanos, los trabajadores y los representantes ecológicos sean tratados como socios a partes iguales a la hora de determinar las políticas relativas al agua y sean reconocidos como los verdaderos herederos y guardianes de los principios indicados.

10) El agua no será un recurso sostenible si prevalecen as políticas de mundialización económica.

Los valores de la mundialización económica, es decir el crecimiento ilimitado y la expansión del comercio mundial son totalmente incompatibles con la búsqueda de soluciones para resolver la escasez del agua. Concebida para recompensar al más fuerte y al menos escrupuloso, la mundialización económica pone fuera de juego a las fuerzas de la democracia local que tan desesperadamente hacen falta para asegurar el futuro del agua. Si aceptamos el principio que para proteger el agua debemos esforzarnos por vivir dentro de nuestros propios cauces, se debe renunciar a la práctica de percibir al mundo como un sólo, único y perfectísimo mercado de consumo.

La mundialización económica perjudica a las comunidades locales por el hecho de facilitar el movimiento de los capitales y permitir el robo de los recursos locales. La liberalización del comercio y de las inversiones permite a algunos países vivir por encima de sus medios ecológicos y de los recursos hídricos de los que disponen; otros abusan de sus fuentes limitadas de agua para irrigar los cultivos que destinan a la exportación. En los países ricos, las ciudades e industrias nacen y crecen en un abrir y cerrar de ojos en los desiertos. Una sociedad que lucha para que el agua sea un recurso sostenible, se opondría a este tipo de prácticas.

Sólo se podrá alcanzar un futuro sostenible, si buscamos una mayor autonomía regional, que no menor. El construir nuestras economías sobre la base de los sistemas hidrográficos locales es la única manera de integrar políticas medioambientales sensatas con la capacidad productiva de la

gente, a la par que proteger nuestras aguas.

CONCLUSIÓN

El mundo acaba de celebrar el cincuenta aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948). Esta declaración señaló un momento clave en la larga epopeya internacional en pos de afianzar la supremacía de los derechos del ser humano y del ciudadano por encima de todo tipo de tiranía política o económica. Junto con el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, dicha declaración viene a ser La Carta Magna del siglo XX. Aparte de otorgar los plenos derechos humanos a todas las personas de la tierra, cualquiera que sea su raza, su religión, su sexo y muchos otros criterios, la Declaración incluye los derechos del ciudadano, y los servicios y protecciones sociales que todo ciudadano tiene el derecho de exigir de su gobierno.

Estos derechos incluyen la seguridad social, la salud y el bienestar de la familia, el derecho al trabajo, a una vivienda decente y a cuidados médicos. Los convenios obligan a los gobiernos a aceptar la obligación moral y jurídica de proteger y fomentar los derechos humanos y democráticos señalados en la Declaración y contienen las medidas necesarias a su implantación. Los derechos y responsabilidades individuales los ciudadanos, tal como quedan establecidos en la Declaración, junto con los derechos y responsabilidades colectivas de las naciones-estado, tal como quedan establecidos en los convenios, constituyen las piedras angulares de la democracia del mundo moderno.

Pero medio siglo después, la falta de acceso al agua potable quiere decir que se le deniega a más de mil millones de personas un derecho garantizado en la Declaración de las Naciones Unidas. En el transcurso de estos cincuenta años, los derechos de los capitales privados han aumentado en proporción, mientras que los derechos de los pobres han desaparecido del mapa político. No es ninguna casualidad que el deterioro y el empobrecimiento de los sistemas hidrográficos del mundo coincidieran en un momento en que las grandes multinacionales incrementaban su poder y que se creaba un sistema financiero mundial en el que las localidades, los pueblos indígenas y los agricultores se han visto privados de sus derechos.

El papel del estado se ha alterado profundamente en las últimas décadas. Tal como lo explica el escritor y activista Tony Clarke, “las empresas sin identidad estatal están consiguiendo transformar a las naciones-estado y amoldarlas de acuerdo con sus intereses relativos a las inversiones y a la competitividad a nivel mundial.” Parece ser que los gobiernos y las instituciones gubernamentales, inclusive las Naciones Unidas, han decidido hacer caso de estas fuerzas empresariales en el peor de los casos, y en el mejor, resultan incapaces de hacerles frente. El ciudadano se encuentra con que tiene que luchar y defender sus intereses por sí sólo.

En los últimos años, se ha constituido un movimiento internacional de trabajadores, de defensores sociales, de grupos de derechos humanos y de organizaciones ecológicas que intenta conseguir que las cuestiones humanas y ecológicas vuelvan a formar parte del programa político. Están formando poderosas alianzas entre ellas para influir sobre la política gubernamental en sus propios países y en todo el mundo, con vistas a dismantelar o al menos reformar las instituciones mundiales que obran en su contra. Los educadores públicos mantienen encuentros para iniciar el asalto encaminado a concienciar al público. Los ecologistas aunan sus esfuerzos para aminorar la marcha de los acuerdos internacionales de libre comercio. Los activistas internacionales que luchan contra la pobreza mantienen encuentros regularmente para forjar un nuevo “contrato social” internacional que propondrán a sus gobiernos.

Otros grupos de esta índole están procurando crear lazos entre ellos y tomar medidas directas para proteger el agua. El Proyecto Planeta Azul (Blue Planet Project) es una iniciativa internacional lanzada por el Consejo de los canadienses (Council of Canadians), para sustraer el agua dulce del mundo a la sombra cada vez más amenazadora del libre comercio y de la privatización. Durante el foro mundial sobre el agua mantenido en marzo del año 2000 en La Haya, los activistas del Canadá y de más de una docena de otros países organizaron la oposición al programa de privatización del foro y crearon una red internacional para proteger el agua como recurso común y derecho humano fundamental. El Proyecto Planeta Azul, que es un movimiento de la sociedad civil a nivel popular, pretende convertirse en una fuerza dinámica en todos los países y localidades del mundo.

Para mayor información sobre este proyecto, sírvase consultar la Web del proyecto:
<http://www.canadians.org/blueplanet>

Ha llegado el momento de adoptar una postura clara, con principios bien definidos, para poner alto a la devastación sistemática de los sistemas hidrográficos del mundo. A largo plazo, las naciones-estado tendrán que disponer de nuevas herramientas para establecer la normativa y las protecciones necesarias para salvar sus sistemas hidrográficos. Se debe desarrollar un derecho internacional que reconozca las obligaciones sociales del capital mundial en lo que se refiere a los intereses de los bienes comunes acuáticos del mundo, y que tenga el poder ejecutorio necesario. Pero si queremos salvar el planeta tierra, lo más fundamental es que sus ciudadanos empiecen a movilizarse sin perder ni un segundo más.

BIBLIOGRAFÍA

Ambramovitz, Janet N., *Sustaining Freshwater Ecosystems*, Informe anual del Worldwatch Institute, *State of the World*, 1996.

Appleton, Barry, *Navigating NAFTA, A Concise User's Guide to the North American Free Trade Agreement*, Carswell Publishing, Toronto y Rochester, 1994.

Bocking, Richard, *Water Export and the Multilateral Agreement on Investment*, preparado para el Comité Legislativo Especial de Columbia Británica sobre el AMI, Vancouver, octubre 1998.

Brown, Lester R., y Halweil, Brian, *China's Water Shortage Could Shake World Food Security*, in *Worldwatch*, julio/agosto 1998.

Canadian Environmental Law Association, *NAFTA and Water Exports*, (Informe de la Asociación Canadiense sobre Derecho Medioambiental) Toronto, octubre 1993.

Canadian Union of Public Employees, *Water Privatization, Coming to a Community Near You?* (Informe del Sindicato Canadiense de Funcionarios Públicos) Ottawa, septiembre 1998.

Clarke, Tony, *Silent Coup, Confronting the Big Business Takeover of Canada*, Canadian Centre for Policy Alternatives y James Lorimer & Company Ltd., Ottawa, 1997.

Deneen, Sally, *Paradise Lost, America's Disappearing Wetlands*, *E Magazine*, noviembre/diciembre 1998.

Gleick, Peter H., *The World's Water: The Biennial Report on Freshwater Resources, 1998/1999*, Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security, Oakland California, Island Press, Washington D.C., Covelo, California, 1998.

Global Initiators Committee for the Water Contract, *The Water Manifesto, The Right to Life*, Lisboa, 1998.

Web de la Global Water Corporation: www.globalwatercorporation.com/gloalteam.ast, *Global Water Gazette*.

Goudrian, Jan-Willem y Hall, David, *Private Water Firms Rife with Corruption*, in Canadian Centre for Policy Alternatives, *Monitor*, abril de 1997.

Graham, Wade, *A Hundred Rivers Run Through It*, *Harper's Magazine*, junio de 1998.

"John Hopkins School of Public Health, Population Reports, Volumen XXVI, Número 1, septiembre de 1998."

Kaplan, Robert, *Desert Politics*, in *Atlantic Monthly*, julio 1998.

Karliner, Joshua, *The Corporate Planet, Ecology and Politics in the Age of Globalization*, Sierra Club Books, San Francisco, 1997.

Linton, Jamie, *Beneath the Surface: The State of Water in Canada*, Canadian Wildlife Federation, (Federación Canadiense de la Fauna y de la Flora) Ottawa, 1997.

Menotti, Victor, *The Environmental Impacts of Economic Globalization*, preparado para el Foro Internacional sobre Mundialización, agosto de 1998.

National Geographic, *Water, The Power, Promise and Turmoil of North America's Fresh Water*, Edición Especial, National Geographic Society, Washington, DC, 1993.

Nature Conservancy, *Rivers of Life, Critical Watersheds for Protecting Freshwater Biodiversity*, Arlington, Virginia, 1998.

Nature Conservancy, *Troubled Waters: Protecting our Aquatic Heritage*, Arlington, Virginia, 1996.

Suplemento especial del *New York Times*, *Water, Pushing the Limits of an Irreplaceable Resource*, 8 de diciembre de 1998.

Platt, Anne, *Water-Borne Killers*, in *Worldwatch*, marzo/abril de 1996.

Polaris Institute, *The Final Frontier: A Working Paper on the Big 10 Global Water Corporations and the Privatization and Corporatization of the World's Last Public Resource*, preparado por Gil Yaron, bajo la dirección de Tony Clarke, Ottawa, 2000

Postel, Sandra, *Forging a Sustainable Water Strategy*, informe anual del Worldwatch Institute, *State of the World*, 1996.

Postel, Sandra, *Last Oasis, Facing Water Scarcity*, Colección Worldwatch Environmental Alert, W.W. Norton & Company, Nueva York, 1992.

Public Citizen, *Comments of Public Citizen, Inc., Regarding U.S. Preparations for the World Trade Organization's Ministerial Meeting, Fourth Quarter, 1999*, Washington DC, octubre 1998.

Public Services International Research Unit, *Privatization News*, enero de 1999.

Public Services International Briefing, *Financing Water—Distortions and Prejudice*, ponencia presentada ante el Foro Mundial del Agua, La Haya, marzo del 2000.

Report on Business, revista mensual del diario *The Globe and Mail*, 19 de Mayo de 1991.

Robbins, Elaine, *Our Water, Ourselves*, *E Magazine*, septiembre/octubre 1998.

Shrybman, Steven, *An Environment Guide to the World Trade Organization*, (Frente Común sobre la Organización Mundial del Comercio) Ottawa, 1997.

Shrybman, Steven, *A Legal Opinion Concerning Water Export Controls and Canadian Obligations under NAFTA and the WTO*, opinión jurídica preparada para el Council of Canadians, Ottawa, noviembre de 1999.

Shrybman, Steven, *Water and the GATS: An Assessment of the Impact of Services Disciplines on Public Policy and Law Concerning Water*, preparada para el Council of Canadians, Ottawa, marzo del 2001.

Southwest Network for Environmental and Economic Justice and Campaign for Responsible Technology, *Sacred Waters: Life-blood of Mother Earth*, cuatro Estudios de Casos de Explotación de Recursos Hídricos y el Bienestar Empresarial en el Sudoeste, 1997.

Stikker, Allerd, *Water Today and Tomorrow, Prospects for Overcoming Scarcity, Futures*, Vol. 30, No. 1, Elsevier Science Ltd., Gran Bretaña, 1998.

Topfer, Klaus, Director Ejecutivo, Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, ponencia presentada ante la Conferencia Internacional sobre Agua y el Desarrollo sostenible, París, marzo de 1998.

Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos económicos y Sociales, *Strategic Approaches to Freshwater Management*, informe del Secretario General, enero de 1998.

Wall Street Journal, "Water Business Is Hot as Cities Decide to Top Private Sector," crónica de Kathryn Kranhold, 9 de noviembre de 1998.

World Resources, 1998-99, Publicación conjunta del World Resources Institute, del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, del Programa de Naciones Unidas sobre Desarrollo, y del Banco Mundial, Oxford University Press, Oxford y Nueva York, 1998.

Yaron, Gil, *Protecting British Columbian Waters: The Threat of Bulk Water Exports under NAFTA*, Universidad de Columbia Británica, abril de 1996.

Maude Barlow es Presidenta Voluntaria del Council of Canadians, el grupo de propugnación más amplio de Canadá. Es miembro fundador del Foro Internacional sobre la Mundialización (IFG) e integra su junta directiva. Conocida como oradora, organizadora y comentarista, Maude Barlow desempeñó un papel crucial en el movimiento internacional de ciudadanos que puso fin a las negociaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con respecto al Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (MAI).

Es autora de 12 títulos, todos de gran acogida, sobre los efectos del libre comercio y la mundialización en los programas sociales, la educación, los medios de comunicación y el medio ambiente.